

Contenido

Presentación 7

Introducción al número monográfico 9

Artículos

Estado y poder: una visión de América Latina en el siglo XX
SERVANDO A. ÁLVAREZ 23

La yuxtaposición de sistemas en América Latina y sus consecuencias
HÉCTOR OMAR NOEJOVICH 51

Interrogantes sobre genealogía y dinámicas de la ciudadanía
DANIELE POMPEJANO 89

La pervivencia de las estructuras de poder del pasado y los retos para el perfeccionamiento del Estado de derecho en América Latina a comienzos del siglo XXI
PEDRO PÉREZ HERRERO 137

El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México (1982–2005): un balance preliminar
ROLANDO CORDERA CAMPOS Y LEONARDO LOMELÍ VANEGAS 195

Derechos de propiedad y sistema normativo en la Argentina del siglo XIX
BLANCA ZEBERIO 233

Reseñas

Schuldt Lange, Jürgen. *¿Somos pobres porque somos ricos?: recursos naturales, tecnología y globalización*
JAN-DAVID GELLES CANER 271

La pervivencia de las estructuras de poder del pasado y los retos para el perfeccionamiento del Estado de derecho en América Latina a comienzos del siglo XXI

Pedro Pérez Herrero*

RESUMEN

El ensayo explica por qué y cómo las sociedades latinoamericanas aceptaron, entre 1930–1980, las diferentes variantes de los regímenes populistas; por qué estos sistemas políticos se perpetuaron durante tanto tiempo; qué mecanismos se emplearon para gestionar el orden interno; por qué y cómo llegaron a su derrumbamiento en la década de 1980; por qué a comienzos del siglo XXI han vuelto a hacerse presentes ciertas formas populistas-demagógicas en el panorama político latinoamericano; por qué el Estado en América Latina alcanzó cotas tan bajas de institucionalidad a mediados del siglo XX; por qué el discurso del mestizaje se convirtió en un elemento central capaz de aglutinar el complejo magma generado por la heterogeneidad estructural; y por qué los *viejos nacionalismos* están dando paso a comienzos del siglo XXI a nuevas formas y discursos alternativos de la identidad.

Palabras clave: *Sistema político, sistema de partidos, populismo, clientelismo, mestizaje, América Latina, Estado de derecho*

ABSTRACT

The essay explains why and how Latin American societies, during the period of 1930 to 1980, accepted the different variants of populist regimes; why these political systems perpetuated for such a long time; what mechanisms were employed to manage internal order; why and how the destruction occurred in the decade of the 1980s; why at the beginning of the 21st century certain forms of populist-demagogic appeals in the Latin-American political panorama returned to the scene; why the State in Latin America reached such low levels of institutionalism halfway through the 20th century; why the discourse of mixed races transformed itself into the central element, capable of uniting the complex magma formed by structural heterogeneity; and why

* Profesor de Historia de América de la Universidad de Alcalá de Henares-UAH (pedro.perezherrero@uah.es).

«old nationalisms» are giving way to new methods and alternative discourses about the concept of identity at the beginning of the 21st century.

Keywords: *Patronage system, partisan system, populism; mixing, Latin America, State of law*

1. Planteamiento general

A comienzos del siglo XXI se comprueba que si bien las políticas económicas ortodoxas de choque han obtenido resultados económicos positivos evidentes e innegables en América Latina (reducción de la inflación y del déficit público, equilibrio de las balanzas comerciales de pagos, aumento de la competitividad, etcétera), y que los gobiernos de la región han sido elegidos por los votos depositados en las urnas y que se han alcanzado las alternancias políticas hacia uno u otro lado del espectro político, todavía siguen pendientes de resolución importantes retos sociales (pobreza extrema, mala distribución del ingreso) y políticos (se ha alcanzado buenos niveles de democracia formal, pero persiste un bajo grado de institucionalización política en la toma de decisiones). La corrupción, el narcotráfico, la violencia, la inseguridad ciudadana y la ineficacia administrativa son algunos síntomas de estas disfunciones en bastantes países de América Latina, en el campo de lo social y lo político. Una explicación plausible de lo que está sucediendo es interpretar que las medidas neoliberales no han hecho más que impulsar viejas prácticas *neoclientelares* y que el ejercicio del poder continúa viciado con prácticas del pasado, a pesar de haberse efectuado una remodelación profunda de los mecanismos de acceso al mismo.

Una de las preguntas que las Ciencias Sociales no dejan de plantearse en los últimos años, es por qué el nuevo orden económico impulsado en la región y el renovado edificio político no han sido capaces de perfeccionar los Estados de derecho hasta la fecha; y por qué los fuertes desequilibrios y tensiones sociales —en vez de incitar a la reclamación del orden como en períodos anteriores— están impulsando una revivificación de algunos de los viejos mecanismos de gobierno populistas del pasado (Benavente y Cirino 2005). Unos lo hacen de forma mesiánica, como Hugo Chávez en Venezuela;

otros, apoyados en un partido de los trabajadores, como Luis Inacio Lula da Silva en Brasil; y otros más, debido a la necesidad de huir del pasado y a la urgencia de generar confianza en el futuro, se apoyan en la alternancia política, como son los casos de Néstor Kirchner en Argentina o Vicente Fox en México. Solo Álvaro Uribe en Colombia y Ricardo Lagos en Chile, representantes de partidos con ideologías diferentes, parecen rechazar sin ambages los fantasmas de los populismos de sus predecesores. Todos los datos apuntan a la necesidad de volver a reflexionar sobre las interpretaciones ofrecidas hasta la fecha sobre el funcionamiento de la economía, el cambio social y los comportamientos políticos en América Latina entre 1930–1980. Se ha escrito mucho sobre las políticas de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y sobre la evolución de los regímenes populistas a mediados del siglo XX (véase bibliografía adjunta), pero cuando se revisa con detenimiento dicha historiografía, se llega al convencimiento de la urgencia de realizar algunas acotaciones pertinentes a algunas interpretaciones tenidas por muchos analistas como *consagradas* y, por tanto, consideradas como inamovibles. Solo con un buen entendimiento de la historia se podrá construir un futuro libre de las ataduras y los vicios del pasado.

La investigación que se ha venido realizando en los últimos años ha tenido como propósito explicar por qué y cómo las sociedades latinoamericanas aceptaron, entre 1930–1980, las diferentes variantes de los regímenes populistas; por qué estos sistemas políticos se perpetuaron durante tanto tiempo; qué mecanismos se emplearon para gestionar el orden interno; por qué y cómo llegaron a su derrumbamiento en la década de 1980; por qué a comienzos del siglo XXI han vuelto a hacerse presentes ciertas formas populistas-demagógicas en el panorama político latinoamericano; por qué el Estado en América Latina alcanzó cotas tan bajas de institucionalidad a mediados del siglo XX; por qué el discurso del mestizaje se convirtió en un elemento central capaz de aglutinar el complejo magma generado por la heterogeneidad estructural; y por qué los *viejos nacionalismos* están dando paso a nuevas formas y discursos alternativos de la identidad a comienzos del siglo XXI.

Para resolver las preguntas que dieron origen a la investigación, se eligieron los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y

Venezuela (en adelante AL-6). Dichos países fueron seleccionados por el volumen, estructura y comportamiento de sus economías, así como por sus dinámicas sociopolíticas. Cada uno tuvo crecimientos demográficos importantes en la época de estudio, se aplicaron con diferente intensidad las políticas ISI, se dieron crecimientos económicos claros a mediados de siglo, la deuda se elevó más de lo permisible en la década de 1960 y 1970 y se desarrollaron autoritarismos (civiles o militares según los casos) de diferente signo. No obstante las diferencias económicas, sociales y políticas apreciadas en cada uno de los comportamientos estudiados, se constató que todos los países analizados tuvieron un final similar a comienzos de la década de 1980. Por ello, una de las preguntas que se planteó al comienzo de la investigación fue tratar de resolver cómo se había llegado a esa misma situación, partiendo de posiciones diferentes y discurriendo por caminos parcialmente distintos. Para ello, se estableció una diferencia temporal entre una primera fase (1930–1960), caracterizada por un relativo éxito de los programas económicos y una segunda (1970–1980), identificada por la acumulación de fuertes desajustes internos.

Primero se recopiló de forma exhaustiva la información documental, bibliográfica y estadística (económica, política y social) existente a fin de realizar un estado de la cuestión. Al repasar la historiografía y las series estadísticas publicadas, se constató la existencia de períodos carentes de información. A partir de entonces, se trabajó en la reconstrucción de las series estadísticas. Para rehacer las dinámicas del comportamiento económico, se seleccionaron las variables de análisis esenciales (estructura fiscal del Estado, dinámica de las inversiones públicas, evolución de los principales comportamientos de las economías, relaciones de poder y gestión de la obediencia, cultura-política) y se estudiaron sus interrelaciones a fin de establecer las diferencias regionales oportunas, es decir las relaciones entre países exportadores/no exportadores de petróleo; países con poblaciones indígenas/sin poblaciones indígenas; países con bajos/altos costos de transporte para la comercialización de sus mercancías en los mercados internacionales debido a su situación geográfica; países con altas/bajas densidades demográficas; países con mayores o menores inversiones *no residenciales* (destinadas a mejorar la estructura productiva), *residenciales* (dirigidas a mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos) o *maquinaria* (enfocadas a mejorar

la productividad de las empresas), etcétera; países con un mayor o menor grado de institucionalización política; países con mayor o menor deuda externa; países con mayor o menor Producto Nacional Bruto (PNB). Posteriormente, se elaboraron los cuadros estadísticos y los gráficos que permitieran mostrar dichas interrelaciones entre las variables analíticas seleccionadas. Lo que a continuación se presenta es un resumen de parte de la investigación general.

2. Comportamientos político-electorales y evolución económica entre 1930 y 1980

Durante el período de estudio (1930–1980), América Latina osciló entre los regímenes civiles (conservadores y liberales) surgidos de elecciones (más o menos transparentes según los casos) y los gobiernos castrenses, que llegaron al poder como resultado de golpes militares. Sin embargo, hay que subrayar que todos los países latinoamericanos finalizaron el siglo con gobiernos surgidos del sufragio electoral, habiendo pasado además por procesos de alternancia política (salvo el caso de Cuba). La historiografía americanista durante años interpretó que existía una relación entre tipo de gobierno (civiles-militares) y comportamiento económico (contracción-expansión). Se solía explicar que los gobiernos castrenses, al tiempo que imponían el orden interno por las armas, contribuían a impulsar la economía ayudando a salir de la crisis generada por los gobiernos civiles con sus políticas expansionistas en el gasto. No obstante, cuando se hace un repaso minucioso de los datos se descubre que esta correlación no se puede aplicar de forma homogénea a toda América Latina, al detectarse la existencia de diferencias regionales y temporales notables.

Argentina

Argentina tuvo una historia convulsa políticamente, que se combinó con una dinámica económica de fuertes altibajos. Inició el período con una corta intervención militar en 1930 y después la presidencia pasó a manos civiles (Concordancia) en 1932, coincidiendo con un período de contracción económica. A continuación, el poder

volvió a ser controlado por los militares en 1943, dándose paso a un período de crecimiento sostenido. Años más tarde (1946), la presidencia volvió a manos de los civiles —Juan Domingo Perón, como representante del Partido Justicialista (PJ)— en el contexto de una brecha primero de auge económico y después de fuerte contracción. En 1952 el poder regresó a los militares en el momento en que la economía se recuperó. Cuando volvieron los civiles (Unión Cívica Radical, UCR), en 1958, la economía volvió a mostrar signos de contracción. Cuando volvieron los militares en 1966, la economía inició un período de auge económico. El retorno de Juan Domingo Perón al poder en 1973 (continuó su gobierno en 1974 María Estela Martínez de Perón), se correspondió con un período de *vacas flacas*. En 1976 los militares controlaron el poder, pero en esta ocasión la economía no se recuperó, sino que siguió mostrando signos de fuerte debilidad. Cuando, finalmente el poder volvió a los civiles (UCR) en 1983, la economía mostró claros signos de recuperación. Como se puede observar, existe una correlación empíricamente demostrable solo hasta 1976, entre la presencia de gobiernos civiles y momentos de contracción económica y la de gobiernos militares con brechas de crecimiento económico. Los militares impusieron el orden por las armas y garantizaron el crecimiento, pero no lo pudieron hacer por mucho tiempo. En líneas generales, los golpes militares ayudaron —salvo los casos de Ramírez y Farrel (1943–1946) y Levingston (1971), que tuvieron que aumentar coyunturalmente el gasto social para paliar la crispación general existente— a reducir en términos proporcionales el total de la riqueza repartida entre el conjunto de la población, debido a que su autoridad no dependía de los votos ni del reparto de riqueza, sino de la fuerza y de la represión ejercida.

La misma base de datos indica al mismo tiempo que los períodos de los gobiernos militares pudieron así concentrar más esfuerzos financieros en la mejora de las infraestructuras y la tecnología, al poder descender el esfuerzo en los gastos sociales debido a que el orden se garantizaba por el empleo de las armas y la gestión del miedo. Evidentemente, todo ello fue posible debido a que se conculcaron las libertades de los ciudadanos y se extendió el terror. A su vez, los gobiernos civiles concitaron el apoyo de la ciudadanía repartiendo beneficios, pero como acabaron con los fondos del gobierno en pocos años, tuvieron que ser relevados regularmente por los militares. Hay

que señalar además que en los períodos de los gobiernos civiles elegidos democráticamente, el poder estuvo controlado por el partido justicialista (peronista) y no hubo alternancia política más que de forma breve con la UCR entre 1958–1963 y 1983–1989, años que se corresponden precisamente con un cambio de un período de crecimiento a otro de contracción (véase el cuadro 1).

Cuadro 1
Evolución del PBI Total y per cápita de América Latina
Promedio anual de tasas de crecimiento por períodos
(Calculado sobre valores del PBI en dólares americanos constantes de 1970)

	1ª etapa 1900-1913		2ª etapa 1914-1929		3ª etapa 1930-1945		4ª etapa 1946-1960		5ª etapa 1961-1973		6ª etapa 1974-1989		7ª etapa 1900-2000	
	PBI	PBI/cap.												
Argentina	6,5	2,3	3,7	1,1	1,9	0,2	3,4	1,6	4,5	2,7	0,5	-1,1	3,8	-1,7
Bolivia							1,0	-1,0	5,5	3,9	1,5	-0,5	3,8	1,4
Brasil	4,6	2,4	3,6	1,5	2,8	0,7	6,6	3,7	7,7	4,8	4,5	2,2	1,7	0,2
Costa Rica			1,8	0,0	0,7	-1,5	5,6	1,5	7,0	3,7	3,4	0,6	4,5	1,6
Chile	3,7	2,5	4,8	3,4	2,0	0,4	3,7	1,5	3,7	1,7	3,6	1,8	5,4	3,9
Colombia	1,2	-1,0	2,8	0,6	3,4	1,2	4,6	0,9	5,6	2,7	4,3	2,0	3,0	0,5
Cuba	11,2	8,2	3,4	0,5	5,8	-1,5	2,6	0,2	3,0	1,0	5,2	4,2	-1,2	-1,8
Ecuador					0,4	1,8	6,4	3,3	6,0	2,6	4,1	1,4	1,9	-0,2
El Salvador			3,8	1,6	0,4	0,6	6,4	1,4	5,5	2,0	1,0	-1,0	4,5	2,7
Guatemala			4,6	1,2	2,7	0,5	6,4	3,3	5,8	2,5	2,9	0,1	3,7	1,5
Honduras			5,1	-3,4	0,8	-1,1	3,9	1,3	4,6	1,0	3,8	0,8	3,0	-0,1
México	3,3	2,3	1,8	0,2	3,9	1,8	6,0	2,8	6,8	3,5	3,3	0,8	3,7	1,9
Nicaragua			4,9	4,3	1,4	-0,6	5,7	2,8	6,4	3,5	-1,0	-4,7	3,0	0,2
Panamá					3,4	0,6	3,4	0,6	7,5	4,3	2,4	-0,2	4,8	3,0
Paraguay					3,2	0,8	2,5	0,2	4,8	2,0	6,0	2,8	2,1	-0,6
Perú	4,3	1,5	5,5	8,7	2,0	0,3	5,1	2,9	5,5	2,6	1,4	-1,0	3,3	1,5
R. Dominicana							6,9	3,8	6,9	3,8	3,7	0,9	4,5	2,7
Uruguay	5,5	3,4	3,6	1,8	1,2	0,0	3,2	1,9	1,0	0,3	1,9	1,2	3,0	2,2
Venezuela	3,4	2,8	8,6	7,6	3,6	1,5	8,7	4,8	5,6	2,2	1,8	-12,0	2,5	0,2
A. Latina	4,9	2,7	4,1	2,1	2,3	0,3	4,8	2,0	5,4	2,7	2,9	-0,1	3,2	1,0

Fuentes: Elaboración propia con datos de la Cepal, FMI, BID, BM, OXLAD, Hofman (1998), Maddison (1992 y 2003), Mitchel (2003) y Wilkie (2002).

Bolivia

Los bolivianos comenzaron la década de 1930 con una fuerte crisis económica que dio origen a un golpe militar. Durante la Guerra del Chaco, los generales pretendieron obtener una salida al río Paraguay, al mismo tiempo que aprovecharon para distraer la atención de la población de los problemas políticos internos. En 1936, un movimiento revolucionario impuso al coronel José David Toro, pero al año siguiente otro coronel, Germán Busch, dio un golpe de Estado; comenzando un período de gobiernos militares con presencia de una fuerte represión. El PBI pasó de tasas de crecimiento negativas a positivas cercanas al 2%. En 1951 salió electo Víctor Paz Estensoro, después de una período convulso de golpes militares y procesos revolucionarios (1946–1952). Los militares dieron un golpe militar, pero el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) dio un contragolpe y volvió a entregar en 1952 el poder al presidente constitucional Paz Estensoro. En 1951 el PBI creció a un inusitado 7% y en 1952 al 3%. Entre 1952 y 1964 los gobiernos civiles (Paz Estensoro y Hernán Siles Zuazo, ambos del MNR) promovieron reformas estructurales. En 1953 la economía se desplomó (el PBI tuvo un comportamiento negativo de -9.5%). A partir de entonces, se inició un período de cambio con brechas de crecimiento del PBI seguidas de agudas crisis.

El promedio del crecimiento del PBI entre 1946–1960 fue de un modesto 1%. El PBI *per cápita* en el mismo período fue de -1%, como consecuencia del elevado estirón demográfico. En 1964 un pronunciamiento militar devolvió el poder a los generales, iniciándose un período de fuertes convulsiones sociales y uso de la fuerza para mantener el orden. Mientras tanto, la economía creció a tasas elevadas (el promedio del período 1961–1973 fue del 5.5% con un PBI *per cápita* del 3.9%). En 1979, Hernán Siles Zuazo y Paz Estensoro consiguieron la mayoría absoluta en las elecciones, pero de nuevo los militares se impusieron sobre el resultado de las urnas. En 1980 se inició una crisis económica (tasas de crecimiento del PBI negativas de hasta el -4.4%) que duró hasta 1987. En 1982, regresaron las formas democráticas con el triunfo de nuevo de Hernán Siles Zuazo (MNR). Es evidente que los datos muestran que los gobiernos civiles no se correspondieron en Bolivia con altas tasas sostenidas de crecimiento

económico y que los gobiernos militares estuvieron acompañados de brechas expansivas económicas (véase el cuadro 1).

Brasil

Inició la década de 1930 con la denominada República Nova (1930–1964). La economía comenzó el período con una contracción (en 1930 la tasa de crecimiento del PBI fue de –3.4%), pero pronto entró en un ciclo expansivo, que solamente se vio ensombrecido por la crisis de 1942 (PBI del –2.5%). Posteriormente, cuando los militares ocuparon el poder (1964–1985), la economía siguió creciendo a tasas elevadas hasta alcanzar un máximo en 1973 (tasa de crecimiento del PBI del 13.5%), momento en el que comenzó un suave declive, que culminó con las crisis de 1981 (tasas de crecimiento del PBI de –4.4%) y 1983 (–3.4%). Finalmente, con el regreso de las formas de gobierno civil-democráticas, a partir de 1985, la economía comenzó a recuperarse de forma lenta (el PBI *per cápita* creció de forma notable, aunque sin mejorar la distribución del ingreso), sin embargo, se dieron algunos baches preocupantes como el de 1990 (–4.2%). En el caso de Brasil, por tanto, no se puede establecer una relación clara entre tipo de gobierno y tendencia de crecimiento económico (véase el cuadro 1).

Colombia

Este país tuvo gobiernos civiles hasta 1953, mostrando una alternancia política entre los dos grandes partidos. El conservador llevó las riendas del país entre 1900–1930, el liberal entre 1930–1946 y de nuevo el conservador se hizo cargo del país entre 1946–1953. En 1953 tomaron el mando los militares y, en 1958, los civiles volvieron al gobierno. Desde entonces, y hasta finales del siglo XX, ha existido una alternancia entre el partido político conservador (1962–1966, 1982–1986) y el liberal (1958–1962, 1966–1982), apreciándose una mayor permanencia temporal de los gobiernos liberales.

En el caso de Colombia no existe una relación clara entre dinámica económica y presencia de gobiernos civiles-militares, ya que entre 1930–1995 hubo un crecimiento económico sostenido —de más o menos intensidad según los años, pero en ningún momento de contracción—, que se correspondió con las etapas de los distintos

gobiernos militares y conservadores-liberales. Hay que recordar que Colombia no aplicó las políticas económicas populistas (el tipo de cambio se mantuvo en los niveles de equilibrio, no se incurrió en elevados déficit presupuestarios y los salarios no se elevaron artificialmente por encima del mercado), siendo en consecuencia un caso atípico. Evidentemente, ello no significó que no se diera una buena distribución del ingreso. Miguel Urrutia puso de manifiesto hace algunos años, que el orden se consiguió en Colombia a mediados del siglo XX, no a través de políticas populistas como en el resto de América Latina, sino a través del funcionamiento de estructuras clientelares bien delimitadas regionalmente, dibujando claras regiones de influencias de poder (Dornbusch y Edwards 1992: cap. 11) (véase el cuadro 1).

Chile

Los chilenos tuvieron una historia de gobiernos civiles elegidos por sistemas democráticos entre 1931 y 1973, que alternó entre representantes del Partido Radical (PR) y del Partido Liberal (PL). En 1932, gobernó Arturo Alessandri (Alianza Liberal); en 1938, subió Pedro Aguirre Cerda del Partido Radical (PR); en 1942, le tocó el turno a Juan Antonio Ríos (PR); en 1946, a Gabriel González Videla (PR); en 1952, a Carlos Ibáñez del Campo (Alianza para la Liberación Popular); en 1958, a Jorge Alessandri Rodríguez del Partido Conservador (PC); en 1964, a Eduardo Frei del Partido Demócrata Cristiano (PDC); y, en 1970, fue elegido Salvador Allende del Partido Socialista (PS). En 1973, el golpe militar de Augusto Pinochet inició una dictadura que duró hasta 1990. A partir de entonces regresaron las formas de elección democrática hasta el día de hoy.

Los datos indican que los gobiernos civiles (conservadores, liberales, socialistas) se correspondieron con épocas de crecimiento moderado, surcadas de contracciones por lo general coincidentes con gobiernos del PR y del PS (1931, 1932, 1938, 1941, 1944, 1947, 1949, 1951, 1956, 1972 y 1973), mientras que los militares pudieron mantener las tasas de crecimiento del PBI durante más tiempo. El PBI *per cápita* solo decreció (-0.3%) en la década de 1940, coincidiendo con los gobiernos del PR. Durante el período de la dictadura de Augusto Pinochet, la tendencia de crecimiento económico del PBI solo cayó

coyunturalmente —aunque de forma brusca— en 1975 (−12.9%) y en 1982 (−14.1%). El PBI *per cápita* ascendió, pero no mejoró la distribución del ingreso. Por otra parte, hay que subrayar que el caso de Chile se muestra como un ejemplo anómalo con respecto al resto de América Latina, por presentar un promedio de crecimiento del PBI bastante estable (de un 3.8%) a lo largo de todo el siglo XX (French-Davis y Stallings 2001; Meller 2005; Navia 2004; San Francisco y Soto 2005) (véase el cuadro 1).

Costa Rica

Coincidiendo con el gobierno de Ricardo Jiménez (1927–1948), Costa Rica sufrió un período de fuertes convulsiones sociales (se creó el Partido Comunista, se cambió la ley electoral y se introdujeron cambios importantes en la ley laboral y la normativa sobre salarios mínimos). En 1948, José Figueres Ferrer se alzó en armas contra el gobierno recién electo de Otilio Ulate, y en 1949, se promulgó una nueva Constitución y se creó el Partido de Liberación Nacional (PLN), de corte socialdemócrata. En 1953, Figueres fue elegido presidente como representante del PLN, ocupando el cargo hasta 1958. En 1958, fue elegido Mario Echando Jiménez, del Partido de Unidad Socialcristiana (PUSC); en 1962, le tocó el turno a Francisco Orlich Bolmarich del Partido de Unión Nacional (PUN); y, en 1966, subió al poder José Joaquín Trejos (PUN). En 1970, regresó a la presidencia José Figueres (PLN). En 1974, fue elegido Daniel Oduber Quirós (PLN). En 1982, asumió la presidencia Luis Alberto Monge Álvarez (PLN), tras el gobierno de Rodrigo Carazo de la Unión Opositora.

El PBI de Costa Rica tuvo un comportamiento bastante errático con fuertes ascensos y descensos entre 1931 y 1946. El PBI *per cápita* descendió de forma notable (−2.5%) en la década de 1950, coincidiendo con el segundo gobierno de Figueres. A partir de la década de 1960, la creación del PLN y la firma de la nueva Constitución aportaron a la economía de Costa Rica las garantías y la confianza necesarias para promover un crecimiento estable, continuo y creciente hasta que devino la crisis de la deuda de 1981 (véase el cuadro 1).

Cuba

La historia de Cuba muestra una sucesión de gobiernos militares desde 1930, con presencia de breves períodos de gobiernos civiles. En 1928, fue reelegido Gerardo Machado; en 1931, se alzó en armas García Menocal; en 1933, fue derrocado Machado y ocupó la presidencia Ramón Grau de San Martín; entre 1934 y 1938, se sucedieron distintos gobiernos provisionales en un clima de clara inestabilidad; en 1938, accedió a la presidencia Fulgencio Batista; en 1944, fue elegido Ramón Grau de San Martín; en 1948, ocupó la presidencia Carlos Prío Socarrás; y, en 1952, tras un golpe de Estado, regresó Fulgencio Batista al poder. En 1959, Fidel Castro entró victorioso en La Habana y a partir de entonces se mantuvo al frente del gobierno de forma continuada hasta la fecha.

La evolución del PBI de Cuba presenta fuertes oscilaciones a lo largo de todo el siglo XX, no pudiéndose en consecuencia establecer una correlación clara entre épocas de crecimiento-contracción y tipo de gobierno. La dictadura de Batista se inició con un fuerte momento de contracción del PBI (-11.6% en 1953), pero después tuvo éxitos económicos indudables hasta la crisis de 1958 (-11.3%). El comportamiento del PBI durante el gobierno revolucionario de Castro fue algo errático hasta 1972, que inició un período de crecimiento sostenido hasta que de nuevo aparecieron los problemas en la década de 1990. La distribución del ingreso mejoró notablemente después de la revolución castrista, pero no hay que olvidar que el PBI *per cápita* descendió un -0.4% en la década de 1970 (tras los ligeros baches de 1980 y 1987) (véase el cuadro 1).

Ecuador

Muestra una historia de alta volatilidad en los gobiernos civiles y continua presencia de gobiernos militares. En 1925, los generales ocuparon el poder; en 1932, fue elegido por las urnas Neptalí Bonifaz, pero diferentes disturbios dieron paso a una rápida sucesión de gobiernos. En 1937, los militares volvieron a ocupar coyunturalmente la presidencia y, a partir de 1938, fueron civiles los que ostentaron la presidencia, aunque por lo general lo hicieron con el apoyo directo o indirecto de los militares. Fue un período de agitaciones sociales

y de conflictos fronterizos con el Perú. En 1946, se promulgó una nueva Constitución, los militares dieron un golpe al mando del coronel Carlos Mancheno pero, en 1952, volvió a ocupar la presidencia por tercera vez José María Velasco Ibarra. Intensos conflictos obreros se sucedieron durante estos años. En 1963, una Junta militar tomó el mando de Ecuador hasta que en 1968 fue elegido presidente por cuarta vez José María Velasco Ibarra, tras haberse redactado una nueva Constitución en 1967. En 1972, los militares volvieron a ocupar el poder. En 1979, se regresó al orden constitucional con el triunfo en segunda vuelta de Jaime Roldós. La paz duró poco pues, en 1982, una crisis política volvió a hacer acto de presencia. A lo largo de todo el período de 1950–1980 la economía mostró fuertes fluctuaciones entre unos años y otros, aunque hay que subrayar que en todo el período no se dieron momentos de crecimiento negativo del PBI (véase el cuadro 1).

El Salvador

Revela una historia bastante agitada entre 1930–1980, con golpes militares y cambio continuo de constituciones. En 1930, tras fuertes agitaciones sociales, un levantamiento militar impuso al general Maximiliano Hernández Martínez. En 1939, se estableció una nueva Constitución. En 1944, el general Salvador Castañeda Castro sustituyó al general Hernández. Cuatro años más tarde, una Junta militar tomó el mando, se redactó una nueva Constitución (1950) y se hizo cargo del gobierno el Partido Revolucionario de Unificación democrática (PRUD), a través de los coroneles (Oscar Osorio y José María Lemus). Entre 1960–1961, regresaron las formas militares con los coroneles Miguel Ángel Castillo y Aníbal Portillo. En 1962, se estableció una nueva Constitución y fue elegido el teniente coronel Julio Adalberto Rivera Carballo como presidente por el Partido de Conciliación Nacional (PCN). En 1967, lo sustituyó el coronel Fidel Sánchez Hernández (PCN). En 1969, comenzaron las tensiones con Honduras por la expulsión de once mil residentes salvadoreños. En 1972, la Asamblea Nacional proclamó presidente al coronel Arturo Armando Molina (PCN), hubo un intento de golpe de Estado y se estableció el estado de guerra. Fueron detenidos centenares de políticos y sindicalistas considerados de izquierda, resurgiendo la guerrilla como resultado de la falta de espacios políticos para la disidencia. En 1977, fue elegido el general Carlos Humberto

Romero (PCN) como presidente de gobierno, con el rechazo de la oposición por considerar que había sido una elección fraudulenta. A partir de entonces la violencia se intensificó aún más en el país. Altas personalidades políticas murieron de forma violenta. En 1979, una Junta militar derrocó a Carlos Humberto Romero. En 1980, fue asesinado el arzobispo Oscar Arnulfo Romero y regresó José Napoleón Duarte del Partido Demócrata Cristiano, siendo elegido presidente.

Durante esta turbulenta historia política, la economía tuvo un comportamiento marcado por las fuertes fluctuaciones. Entre 1930–1950, el PBI crecía (hasta en un 27% en 1947) y se desplomaba bruscamente (–10% en 1932) de un año al otro, en un clima de caos perpetuo. Entre 1950 y 1978 el PBI creció a un ritmo de un 5.7% dibujando un período de crecimiento económico sostenido. En la década de 1950, el PBI *per cápita* creció a tasas elevadas (4%) coincidiendo con los gobiernos del PRUD. A partir de 1979, el PBI volvió a decrecer a tasas elevadas (–8.6% en 1980 y –8.3% en 1981). Los gobiernos militares solo fueron capaces de impulsar el crecimiento económico en el contexto del equilibrio de fuerzas conseguido con la Constitución de 1950. El golpe de Estado de 1977 inició un período de fuerte contracción económica. El regreso de los gobiernos civiles a partir de 1980 se correspondió en esta ocasión con brechas de crecimiento económico (véase el cuadro 1).

Guatemala

Ofrece también una historia de agitaciones y convulsiones a lo largo del siglo XX, y en especial entre 1930–1980. En 1931, accedió constitucionalmente a la presidencia Jorge Ubico Castañeda por el Partido Liberal (PL); en 1937, prolongó su mandato mediante un plebiscito por otros seis años; y 1944, tuvo que abandonar el país dejando tras de sí un rastro de desorden, siendo sustituido por Juan José Arévalo Bermejo del Partido de Acción Revolucionaria (PAR). En 1945, se redactó una nueva Constitución y, en 1949, los militares trataron de conseguir el poder por las armas, pero no tuvieron éxito. En 1950, Jacobo Arbenz (PAR) fue elegido presidente, comenzando un período de importantes reformas estructurales e impulso de la reforma agraria. En 1954, ante la situación de tensión política, los militares tomaron el poder, tras la dimisión de Arbenz. Carlos Castillo

Armas (1954–1957), gobernó de forma dictatorial hasta 1957, cuando fue asesinado. Tras un período convulso de gobiernos militares, fue elegido en 1958 como nuevo presidente el general Miguel Ydígoras Fuentes del Partido Democrático de Reconciliación Nacional (PDRN). En 1963, el coronel Enrique Peralta Azurdía dio un golpe de Estado, suspendió la Constitución, clausuró la Asamblea Nacional y prohibió los partidos políticos. En 1966, Julio César Méndez Montenegro del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), fue elegido presidente, se redactó una nueva Constitución y se multiplicaron los grupos extremistas tanto de izquierda como de derecha, creando una situación insostenible de violencia. En 1970, accedió a la presidencia el coronel Carlos Arana Osorio (MLN); en 1974, subió el general Eugenio Kjell Laugenrud (MLN); en 1978, la Asamblea designó presidente al general Fernando Romeo Lucas García (MLN). En 1980, murieron 39 personas en la Embajada de España en Guatemala. En 1982, un movimiento militar elevó a la presidencia a Efraín Ríos Mont. En 1986, un gobierno constitucional salido de las elecciones celebradas en 1984 tomó posesión, restableciéndose las formas democráticas electorales en Guatemala.

La economía de Guatemala tuvo un comportamiento agitado entre 1930–1980. El gobierno de Jorge Ubico comenzó con un impulso del crecimiento del PBI considerable (37.5% en 1936), pero terminó su mandato con una fuerte crisis (–33% en 1943). El período militar de 1944–1950 se caracterizó por la crisis (a excepción de un fuerte repunte coyuntural en 1946). Los gobiernos del PAR (Arévalo y Arbenz), si bien estuvieron acompañados de un crecimiento económico moderado del PBI, mostraron crecimientos negativos del PBI *per cápita*, como resultado del fuerte crecimiento demográfico. Los gobiernos militares de 1954–1984 impulsaron un crecimiento del PBI durante bastantes años, pero terminaron sus días con la crisis profunda de 1980–1983. Como se puede comprobar, cada período histórico (a excepción del gobierno de Arbenz), se correspondió con un comportamiento de auge y crisis de la economía, independientemente de si fueran civiles o militares sus gobiernos (véase el cuadro 1).

Honduras

Presenta una historia bastante convulsa. En 1924, comenzaron los gobiernos militares con la dictadura de López Gutiérrez. En 1925, desembarcaron los *marines* estadounidenses para ayudar a restablecer el orden tras la guerra civil. En 1929, fue asesinado el presidente electo (civil) Vicente Mejía en el acto de toma de posesión. En 1933, ocupó la presidencia el general Tiburcio Carías Andino, fundador del Partido Nacional (PN). En 1936, se estableció una nueva Constitución. En 1949, fue elegido Manuel Gálvez (PN) para ocupar el máximo cargo de gobierno. En 1954, ocupó la presidencia Julio Lozano (PN). En 1956, pasó a dirigir los destinos de Honduras una Junta militar. En 1957, fue elegido presidente Ramón Villena Morales del Partido Liberal (PL). En 1963, subió al poder el coronel Oswaldo López Arellano en calidad de Jefe de la Junta militar. En 1971, fue elegido presidente Ramón Ernesto Cruz (PN), tras la guerra con El Salvador, pero al poco tiempo López Arellano se alejó de las formas democráticas al dar un golpe de Estado para seguir ostentando el poder. En 1975, fue designado nuevo presidente Juan Alberto Melgar Castro por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. En 1978, la Junta militar asumió el gobierno de Honduras. En 1982, regresaron las formas democráticas electorales con el triunfo de Roberto Suazo Córdova (PL) a la presidencia.

Durante esta tensa historia, la economía hondureña mostró fuertes turbulencias. Entre 1924–1933, coincidiendo con los gobiernos militares, la economía fue decreciendo de forma notable. Durante el período de la Constitución de 1936 y hasta el golpe militar de 1956, la economía se recuperó, aunque el PBI *per cápita* descendió (–2.6%) en la década de 1940, como resultado del impulso demográfico. En 1954, la crisis económica hizo que los gobiernos militares tomaran el poder para recuperar el orden. Entre 1955 y 1973, coincidiendo con los gobiernos liberales, conservadores y militares, la economía creció a tasas moderadas pero continuas. El regreso de los militares, en 1971, coincidió con una primera fase de ciertos problemas económicos, pero al poco tiempo se logró impulsar el crecimiento. El regreso de las formas democráticas en 1980 coincidió con un período de crisis económica, pero posteriormente se logró enderezar el camino. Se aprecia, por tanto, que entre 1930–1980, los gobiernos militares y

civiles coincidieron con períodos de auge y crisis en la economía. Fue habitual que los distintos gobiernos (civiles y militares), en una primera fase, fueran capaces de impulsar el crecimiento económico, pero al cabo de un corto tiempo parece como si se acabaran las fuerzas o el modelo se agotara, dando paso al gobierno subsiguiente (véase el cuadro 1).

México

Tuvo una historia política sin presencia de golpes militares desde 1920. Debe subrayarse que desde entonces, y hasta el 2000, estuvo controlada por un solo partido que fue cambiando de nombre: Partido Nacional Revolucionario (PNR) entre 1928–1940, Partido de la Revolución Mexicana (PRM) entre 1940–1946 y Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 1946–2000. En 2000, ocupó la Presidencia de la República el Partido Acción Nacional, dándose así la primera alternancia partidista en ochenta años. Entre 1930–1980 las tasas de crecimiento económico del PBI siempre fueron positivas, pero se detecta una mayor intensidad en los años centrales del siglo (1950–1960). Las presidencias de Emilio Portes Gil (1928–1930), Pascual Ortiz Rubio (1930–1932) y Abelardo Rodríguez (1932–1934), tuvieron un comportamiento económico negativo. La llegada de Lázaro Cárdenas (1934–1940), inició una fase expansiva que acabó de forma brusca con la crisis de 1982, coincidente con el final del gobierno de José López Portillo (1976–1982) y el inicio de Miguel de la Madrid (1982–1988).

Es posible apreciar que el ritmo sexenal de la política mexicana se trasladó a la economía, al comprobarse que por lo general cada presidencia arrancó y terminó con problemas económicos, concentrándose en consecuencia el mayor impulso del crecimiento económico en los años centrales de cada uno de los sexenios. Este comportamiento se explica por la costumbre que los presidentes salientes tenían de realizar algunas de las reformas económicas necesarias (por lo general, impopulares), para dejar el panorama despejado al presidente entrante. Carlos Salinas (1988–1994), no respetó este comportamiento dejando a Ernesto Zedillo un complicado legado (el PBI *per cápita* descendió en un –0.4% en la década de 1990) (véase el cuadro 1).

Nicaragua

La historia de Nicaragua durante el siglo se caracterizó por un continuo baile de gobiernos civiles y militares, unido a intervenciones de los *marines* estadounidenses y a movimientos guerrilleros. En 1925, tras la retirada de las tropas estadounidenses, civiles, militares y guerrilleros pelearon por el poder en Nicaragua. En 1934, fue asesinado Augusto César Sandino, dejando a Anastasio Somoza García, “Tacho”, vía libre para ocupar el poder de forma dictatorial. En 1939, se dictó una nueva Constitución y, en 1950, se reformuló para permitir a Somoza seguir ostentando de forma absoluta el poder máximo del país. En 1956 Somoza fue asesinado, sucediéndole de forma automática su hijo Luis Somoza Debayle. En 1959, se suspendieron las garantías constitucionales ante los continuos conatos revolucionarios; en 1960, se proclamó la Ley Marcial y, entre 1961–1962, se produjo la guerra contra Honduras. En 1963, subió a la presidencia René Schick Gutiérrez; en 1966, le tocó el turno a Lorenzo Guerrero y, al año siguiente, tomó el mando del país Anastasio Somoza Debayle, “Tachito”, sofocando a sangre y fuego cualquier revuelta y rechazando cualquier reclamación, viniera de donde viniera. En 1971, el Congreso fue disuelto, traspasando sus poderes al dictador Somoza. En 1978, se decretó el Estado de sitio en los departamentos de Mesaya y Estela y fue asesinado Pedro Joaquín Chamorro. En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional formó una Junta de Reconstrucción Nacional tras el golpe de Estado dado por Edén Pastora, “Comandante Cero”. En 1980, fue asesinado Somoza en Paraguay.

Durante el siglo XX la economía nicaragüense mostró fuertes fluctuaciones. Hasta el gobierno del primer Somoza, “Tacho”, de la saga familiar, el PBI dibujó violentas oscilaciones (–19.8% en 1936, 23.9% en 1939), con un crecimiento *per cápita* negativo en la década de 1940. Durante la dictadura somocista, el PBI creció a tasas constantes de un 6.4%, aumentando al mismo tiempo el PBI *per cápita* (no así la distribución del ingreso, que empeoró). La llegada de los gobiernos revolucionarios desde finales de 1978, estuvo acompañada de crisis económicas agudas (el PBI total y *per cápita* descendieron). Se puede, por tanto, afirmar que en el caso de Nicaragua funciona correctamente la tesis que sostiene que los gobiernos militares coincidieron con períodos de auge económico y

que los gobiernos revolucionarios se caracterizaron por momentos de contracción económica, pero de mejoría en la distribución del ingreso (véase el cuadro 1).

Panamá

Muestra una historia unida al Canal no exenta de gobiernos militares, golpes y asonadas. Tras los primeros gobiernos civiles independientes desde 1903, en el contexto de la Constitución en 1941 (modificada parcialmente en 1946), fue elegido en 1948, Domingo Días Arosemena (acusado de haber cometido fraude en las elecciones). A su muerte, le sucedió en 1949 Daniel Chanis, originándose fuertes convulsiones sociales. Fue entonces cuando los militares decidieron actuar imponiendo a Arnulfo Arias como presidente en 1949, quien derogó la Constitución. Un movimiento social echó del poder a Arias, entró a gobernar Alcibíades Arosemena (1951), le sustituyó José Antonio Remón (1952) y, tras su asesinato, ocupó la presidencia coyunturalmente José Ramón Guizado (1955). Posteriormente le sucedieron: Ricardo Arias Espinosa (1955), Ernesto de la Guardia (1956), Roberto Francisco Chiari (1960), Marco Aurelio Robles (1964) y Arnulfo Arias (1968). En 1968, en un clima de violentas protestas sociales y de desorden, los militares se hicieron cargo del gobierno tras el golpe de Estado comandado por el coronel Omar Torrijos. En 1972, se redactó una nueva Constitución y fue elegido Demetrio Lakas como presidente. En 1978, la Asamblea Nacional de Representantes eligió a Aristides Arroyo. En 1980, se realizaron las primeras elecciones desde 1968, con la participación de partidos políticos organizados.

La economía de Panamá refleja las turbulencias políticas del país. Los gobiernos militares de mediados de siglo fueron precedidos por una clara brecha de descenso del PBI (-6% en 1948). El reinicio de los gobiernos civiles comenzó con un clima de contracción económica (PBI de -0.8% en 1951), pero pronto se inició un período de crecimiento que duró hasta 1984 (con un bache en 1975-1976 de crecimiento del 0%). El PBI *per cápita* tuvo un ascenso notable en la década de 1970, en el contexto de la Constitución de 1972. El gobierno militar de 1968 no supuso cambios en el comportamiento del PBI (véase el cuadro 1).

Paraguay

También revela una historia de continuos vaivenes entre gobiernos civiles y militares. Tras la Guerra del Chaco contra Bolivia en 1932, el golpe militar en 1936 y el restablecimiento del orden constitucional en 1937, ocuparon sucesivamente la presidencia José Félix Estigarribia (1939), Higinio Moriñigo (1940) y Juan Natalicio González (1948). Derrocado González, comenzó un período de inestabilidad política y revueltas sociales en el que se sucedieron cuatro presidentes en tres años. En 1954 el general Alfredo Stroessner dio un golpe de Estado y ocupó dictatorialmente el poder hasta 1989.

En el caso de Paraguay, los gobiernos civiles de las décadas de 1930 y 1940 se correspondieron con épocas de fuertes inestabilidades económicas (-15% en 1940, -13% en 1947, 16.8% en 1949). La dictadura de Stroessner coincidió con un clima de crecimiento continuado del PBI (tanto en cifras totales como del *per cápita*). No obstante, la distribución del ingreso se fue empeorando conforme avanzaba la dictadura (véase el cuadro 1).

Perú

La década de 1930 comenzó con el golpe militar dado por el coronel Luis M. Sánchez Cerro, hecho que inició una serie de gobiernos militares que durarían hasta 1939. Esta etapa estuvo acompañada de agitaciones sociales, asesinatos (como el del propio presidente Sánchez Cerro) y fricciones con Colombia. En 1939, accedió a la presidencia el conservador Manuel Prado Ugarteche, coincidiendo con un recrudecimiento de las tensiones en la frontera con Ecuador. En 1945, subió al poder José Luis Bastamente y Rivero en representación del Frente Democrático Nacional (FDN) y con el apoyo de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra). Al poco tiempo en 1948, los militares (con el general Manuel A. Odría), volvieron a ocupar el gobierno, manteniéndolo esta vez en sus manos hasta 1956. Ese mismo año, fue elegido nuevamente, tras la celebración de elecciones generales, Manuel Prado Ugarteche como presidente del Perú, recibiendo el apoyo en esta ocasión del Apra. Fue una época de fuertes movilizaciones sociales y de recortes en el gasto público para tratar de reducir el déficit y la inflación. En 1962, los militares

(con los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley) volvieron al poder. En 1963, fue elegido por las urnas Fernando Belaúnde Terry, en representación de Acción Popular (AP), el cual comenzó a trabajar en el impulso de una reforma agraria. No obstante, los militares volvieron a controlar el poder a partir de 1968, quedándose esta vez hasta 1980. Este período se caracterizó por la presencia continua de huelgas, movimientos sociales, asesinatos y actos terroristas. El gobierno respondió con el uso indiscriminado de la fuerza. En 1980, fue elegido nuevamente Fernando Belaúnde Terry (AP), iniciando un período de gobiernos civiles con presencia de viejos (AP y Apra) y nuevos partidos (Cambio 90-Nueva Mayoría y Perú Posible).

El comportamiento del PBI muestra que los militares ocuparon el poder en 1930 coincidiendo con una de las crisis más duras de la historia del Perú (-11.5%), logrando solo durante un primer momento impulsar la economía. Los gobiernos civiles de los años 1939-1948, solo lograron de forma tímida hacer crecer la economía sufriendo una crisis en 1943 (-2.3%). El siguiente período militar (1948-1956), representó una fase de relanzamiento de la economía a excepción de la crisis de 1950 (PBI de -2.9%, y PBI *per cápita* de -4.8%). El gobierno Prado-Apra (1956-1962), representó una época de claro crecimiento económico. Cuando regresaron al poder los militares en 1956, la economía se encontraba esta vez en un momento de expansión. Durante su mandato, el PBI se mantuvo con tasas de crecimiento positivas con un promedio de 4.7%. Solo coyunturalmente durante el año de 1977 la economía se contrajo (0% de crecimiento del PBI). No obstante el crecimiento de las macromagnitudes, se observa que la distribución del ingreso fue empeorándose y el PBI *per cápita* reduciéndose (-2.2% en 1968). En suma, se comprueba con ello que tampoco en este caso se puede establecer una relación clara entre crecimiento económico y tipo de gobierno. La única regularidad que se puede hallar es que los militares solieron iniciar sus mandatos (aunque con la excepción de 1962), en los momentos en que la economía se hallaba en momentos de contracción (véase el cuadro 1).

República Dominicana

La historia de la República Dominicana es un ejemplo de cómo se fueron cruzando los gobiernos civiles-democráticos con los militares

y las dictaduras, todo ello cruzado con las injerencias de los *marines* estadounidenses, las huelgas, los movimientos sociales, los magnicidios, las revoluciones y la guerra civil. En 1916, las tropas de los Estados Unidos invadieron la isla e impusieron un gobierno títere. En 1924 se expulsó a las fuerzas ocupantes, se promulgó una nueva Constitución y, en 1930, subió al poder Rafael Leónidas Trujillo, primero de forma democrática y después perpetuándose dictatorialmente hasta 1952, siendo sustituido primero por su hermano Héctor Bienvenido Trujillo (1952–1960) y, posteriormente, por Joaquín Balaguer Ricardo (1960–1961). En 1961, el dictador Rafael Leónidas Trujillo fue asesinado y una junta cívico-militar asumió la presidencia. Durante los cuatro años siguientes, golpes y contragolpes fueron encumbrando a la presidencia al general Pedro Rodríguez Echevarría (1962) y a Rafael Filiberto Bonelly (1962–1963). En 1963, fue elegido democráticamente Juan Bosch Gaviño, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pero su gobierno duró poco tiempo. Un golpe de Estado dio paso a los gobiernos militares. En 1965, una guerra civil enfrentó a los partidarios del coronel Francisco Caamaño (defensor de Juan Bosch) con los del general Antonio Imbert Barrera (favorable de la Junta miliar). Un nuevo desembarco de las tropas estadounidenses ayudó a restablecer la paz y a realizar elecciones; en las que salió elegido Joaquín Balaguer Ricardo (1966), ahora en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). En 1978, fue elegido presidente Silvestre Antonio Guzmán, en representación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras un período de anuncios de golpes de estado y del desembarco de grupos guerrilleros a la isla en un clima de recorte del gasto ocasionado por la crisis del petróleo. En 1982, Guzmán fue sucedido por Salvador Jorge Blanco (1982–1986) del PLD. En 1986, Joaquín Balaguer (PRSC) inició su quinto mandato tras volver a ganar los comicios.

La economía dominicana muestra un ritmo convulso a lo largo de todo el siglo XX. Hasta la dictadura de Trujillo, el desenvolvimiento del PBI mostró violentos vaivenes. La llegada de la figura de Trujillo en 1930, trajo un cierto orden económico a la isla y épocas de fuerte crecimiento del PBI como la de 1947–1952. El gobierno del hermano del dictador comenzó con una crisis económica (–1.2% en 1953). El período de fuertes convulsiones políticas, entre 1961–1966, se estrenó con una fuerte crisis (–2.2% en 1961) y finalizó con una contracción

económica violenta (−12.4% en 1965), tras haber discurrido por años de franca bonanza. El gobierno del PRSC, liderado por Joaquín Balaguer (1966–1978), estuvo acompañado de un clima económico de fuerte crecimiento. Por último, hay que subrayar que la llegada al poder del PLD en 1978, coincidió con una brecha de crecimiento que se fue reduciendo a partir de 1982 (el PBI *per cápita* en 1982 fue ya de −5.2% y en 1985 de −4.9%). En suma, se constata que si bien la dictadura de Trujillo estuvo acompañada de crecimiento del PBI, también lo estuvieron los gobiernos civiles del PRSC y del PLD entre 1966 y 1985 (véase el cuadro 1).

Uruguay

La historia del Uruguay comenzó tras la crisis internacional de 1929, con un golpe de Estado y el suicidio del presidente Baltasar Brum del Partido Colorado (PC), de tendencia socialdemócrata. En 1934 se estableció una nueva Constitución y, en 1938, fue elegido Alfredo Baldomir como presidente. En 1943 fue electo Juan José Amézagá. En 1947, regresó al poder el PC (primero con Tomás Barreta y, tras su muerte, con Luis Conrado Batlle Berres). En 1951, una reforma constitucional reemplazó la presidencia de la República por un Consejo Nacional de Administración (CNA), constituido por nueve miembros. En 1958 ganó las elecciones el Partido Blanco (PB), con un perfil más de la derecha clásica. En 1966, el poder volvió a manos del PC, suprimiéndose el CNA y regresándose al régimen presidencial. En 1968 se dieron grandes movilizaciones sociales y, en 1970, se iniciaron las acciones de la guerrilla de los tupamaros. En 1971, subió a la presidencia Juan María Bordaberry, disolvió el Congreso e inició una transición hacia los gobiernos militares con la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). En 1974, el Ejército sofocó el movimiento tupamaro y, en 1976, los militares ocuparon el poder, reteniéndolo hasta el regreso de las formas democráticas con el triunfo del PC (Julio María Sanguinetti) en 1985.

La economía de Uruguay, durante la primera mitad del siglo XX, es un ejemplo típico de una economía con bruscos vaivenes en el crecimiento del PBI (de tasas de crecimiento de 22% a −17% en años sucesivos). Durante la segunda mitad del siglo, esta volatilidad del comportamiento de la economía se suavizó, pero no se corrigió,

complicando el desarrollo económico. El período del gobierno del PC entre 1947–1951, se correspondió con una época de auge. La etapa de 1952–1966, correspondiente al sistema de gobierno del CNG, estuvo acompañada de fuertes fluctuaciones económicas. El regreso al poder del PC entre 1967–1976, coincidió con una época de auge, con la excepción de la crisis de 1971–1972. La llegada de los militares en 1976, se caracterizó por una primera fase de crecimiento económico (1976–1984) y una segunda de fuerte contracción (1981–1985). El caso de Uruguay muestra, por tanto, la imposibilidad de relacionar gobiernos militares con crecimiento económico y períodos civiles con recesión. Las políticas de tono izquierdista de los gobiernos se correspondieron por lo general con brechas de crecimiento económico (véase el cuadro 1).

Venezuela

Comenzó el siglo XX con gobiernos militares (1898–1945), pasando a ser gobernada, a partir de 1945, por Rómulo Betancourt de Acción Democrática (AD), de tendencia socialdemócrata, tras celebrarse las primeras elecciones generales del siglo XX. En 1948, el poder regresó a manos de los militares, como reacción a los cambios (nacionalización de los medios de transporte, impulso a la industrialización, subida de impuestos a las compañías petroleras, abolición del servicio militar obligatorio), que habían comenzado a introducir los sucesivos gobiernos de AD. En 1959 volvió al poder AD, primero con Rómulo Betancourt (1959–1964) y posteriormente con Raúl Leoni (1964–1969). A partir de entonces se dio una alternancia política regular en la presidencia entre los dos partidos más importantes del país: el Comité de Organización Política y Elección Independiente (COPEI), de perfil demócrata cristiano, y AD. Los militares trataron de regresar al poder en 1966, pero su golpe resultó fallido. En 1969, fue elegido presidente Rafael Caldera (COPEI), con el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC). En 1974, le tocó de nuevo el turno a AD, liderado ahora por Carlos Andrés Pérez. En 1979, regresó el poder a COPEI (Luis Herrera Campins), apoyado también en esta ocasión por el PSC. En 1984, la presidencia volvió a ser controlada por AD, reteniéndola hasta 1993. En la mayoría de los casos el porcentaje de participación de la población en las elecciones fue bajo.

La economía de Venezuela muestra que los gobiernos militares de la primera mitad del siglo estuvieron acompañados de permanentes y fuertes fluctuaciones del PBI (−15.3% en 1931, 29.7% en 1925). La llegada de las formas democráticas en 1945, con los gobiernos civiles de COPEI y AD, coincidió con un crecimiento económico del PBI bastante estable en la región (aunque con una ligera tendencia a la disminución). Por lo general, los gobiernos de AD fueron capaces de impulsar más activamente el crecimiento económico que los de COPEI. La crisis de 1980 afectó de forma directa al gobierno de Luis Herrera Campins de COPEI, comprobándose un grave deterioro del PBI *per cápita* (−4% como promedio entre 1979–1984) (véase el cuadro 1).

En suma, la base de datos construida para esta investigación indica que los regímenes autoritarios militaristas no coincidieron siempre —como algunos historiadores han sostenido de forma generalizada para toda América Latina— con coyunturas económicas expansivas. Dicha tesis solo parece funcionar adecuadamente en Argentina (hasta 1976), Bolivia, El Salvador (solo a partir de 1950 y hasta 1977), Nicaragua y Paraguay. En Brasil y Venezuela existe constancia de que funcionó precisamente al revés (los regímenes militares coinciden con épocas de contracción económica). En el resto de los países, no se observa una correspondencia clara entre sistema político de gobierno y desempeño económico.

La misma base de datos permite constatar que, cuando los presidentes fueron elegidos a través del sufragio universal, el partido ganador obtuvo siempre una ventaja notable en votos sobre su más cercano competidor en la mayoría de los países de América Latina (a excepción de Chile, que muestra una mayor proporcionalidad de los votos del candidato elegido y sus contrincantes más inmediatos). En México, con un partido hegemónico como el PRI, este hecho llegó a magnitudes elevadas (José López Portillo en 1976 obtuvo el 100% de los votos al no tener contrincante).

Finalmente, hay que subrayar que la mencionada base de datos muestra también que el número de votos emitidos, con respecto a la conformación de las Cámaras Legislativas, estuvo menos polarizado que en el caso de las elecciones a presidente (aunque

el partido ganador obtuvo siempre casi el doble de votos válidos que su inmediato competidor). El caso de México es revelador de la presencia de un partido hegemónico como el PRI, y el de Chile y Brasil son representativos por la presencia de un número elevado de partidos en la contienda electoral y por la mayor proporcionalidad de los votos recibidos por estos. Colombia y Venezuela se caracterizaron por el bipartidismo y por una mayor proporcionalidad de los votos recibidos. Por lo general, en estos dos países se dio una baja participación ciudadana en los comicios convocados para la renovación de las Cámaras, lo cual no es extraño, teniendo en cuenta que se trata de sistemas presidencialistas. Argentina estuvo marcada por el enfrentamiento peronismo-antiperonismo derivado del fuerte personalismo de la figura de Juan Domingo Perón, antes que por la contienda entre el PJ y la UCR.

Como conclusión, se puede afirmar que en América Latina se sucedieron diferentes escenarios sociopolíticos, así como diferentes conexiones entre el desempeño económico y la dinámica política. Lo que es importante, en consecuencia, es entender por qué y cómo se llegó en la década de 1980 a situaciones parecidas en todos los países. Para ello, a continuación se explicará qué variables se están proponiendo en la investigación en curso, para entender adecuadamente el ejercicio del poder en América Latina entre 1930–1980 y, con ello, tener más información para racionalizar cómo, en qué condiciones y por qué fue aceptado el poder en sus diferentes variantes por el conjunto de la sociedad en América Latina en dicho período.

3. Dinámicas de poder y gestión de la obediencia en América Latina durante el período entre 1930–1980

Una vez que se reconstruyeron los comportamientos más importantes de las variables económicas, sociales y políticas de América Latina entre 1930–1980, se procedió a establecer las correlaciones entre las mismas a fin de extraer las enseñanzas necesarias que permitieran comprender la lógica del poder. Se partió de dos preguntas iniciales. ¿Por qué una población —con una gran heterogeneidad estructural— obedeció a los gobiernos civiles en unos casos y hasta qué grado

aceptó el uso de la fuerza en otros? ¿Se detecta la utilización de ciertos mecanismos, hasta cierto punto, similares por los gobernantes (civiles o militares) para lograr que sus decisiones fueran aceptadas por la gran mayoría de la población o se emplearon métodos tan variados en cada caso regional, que impiden cualquier tipo de generalización para el comportamiento continental?

Para comenzar, hay que subrayar que para entender adecuadamente la gestión del poder en América Latina entre 1930–1980, se debe partir del entendimiento de la relación que se dio entre autoridad y ciudadanía. Para ello, se hace imprescindible recordar que en la mayoría de las sociedades de América Latina durante el período analizado, no existió una administración pública profesionalizada que gestionara lo público con eficacia y transparencia; y que la ley se identificó más por el ejercicio discrecional de la distribución del perdón y del reparto de privilegios, que por el cumplimiento transparente de las normas vigentes. Como se puede comprender, algunos de los elementos básicos requeridos para la Constitución de un Estado de derecho (existencia de una administración eficaz profesionalizada, aplicación de la Constitución, y ejercicio transparente de la ley), no accionaron con la corrección requerida para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones. En consecuencia, acabó confundándose la gestión de lo público con la protección de los intereses privados y el mantenimiento de los privilegios de unos pocos con la salvaguarda de la paz y la soberanía nacional.

A fin de comprender correctamente las relaciones entre la autoridad y la ciudadanía, se estudiará primero las vinculaciones entre el tipo de inversiones públicas y el tipo de gobierno; se pasará después a investigar, por qué no se realizaron las reformas fiscales pendientes; se verá en tercer lugar la relación que se dio entre votos y gasto público; se explicará en cuarto lugar por qué no se perfeccionaron los Estados de derecho, fortaleciéndose en su lugar las relaciones de Antiguo Régimen; y finalmente, se analizará el funcionamiento de los *pactos de dominación*, para poder comprender adecuadamente la presencia de gobiernos fuertes en el contexto de Estados débiles.

3.1 Correlación entre inversiones (residenciales, no residenciales y maquinaria) y tipo de gobierno

La base de datos construida para la presente investigación, permite descubrir que en América Latina se dio una especial conexión durante el período 1930–1980, entre el manejo del poder, la dinámica de los sistemas fiscales y el tipo de administración pública empleada. A mediados del siglo XX, como consecuencia del crecimiento demográfico exponencial, el aumento ingente del gasto público, el descenso de los beneficios obtenidos del comercio externo y el escaso incremento de los ingresos derivados de la tributación de las rentas, se generaron voluminosos déficit en las cuentas del Estado. Estos, tuvieron que ser saldados por medio de la ampliación continua y creciente de la deuda interna y externa. A su vez, la expansión solo aritmética de los volúmenes de producción, generó amplias bolsas de trabajadores informales no pagadores de impuestos directos, pero receptores de servicios públicos.

Esta concatenación de hechos descritos fue más o menos conocida en la época y ha sido motivo de diferentes explicaciones de parte de los historiadores. La variable explicativa nueva, que incorpora la presente investigación, es mostrar que los cuellos de botella que se dieron a mediados del siglo XX (y se están dando de nuevo a comienzos del siglo XXI) en el desarrollo económico y político, tuvieron sus raíces básicamente en la pervivencia de unas estructuras de poder del pasado. La divergencia entre una Hacienda típica de Antiguo Régimen y una economía que trataba de modernizarse, hizo que los gobiernos quedaran atrapados en el proceso y que se acabara frenando el desarrollo económico y social. De no ser así, las políticas ISI y los gobiernos populistas habrían tenido desenvolvimientos y consecuencias distintos en el largo plazo; y las medidas neoliberales puestas en práctica en la década de 1990 habrían generado resultados estructurales de mayor calado. Esta historia ha sido bien estudiada para el caso de España (Fuentes Quintana 1990).

Algunas de las variables que componen la argumentación explicativa central de la presente investigación, habían sido estudiadas por separado con diferente intensidad desde la perspectiva de cada una de las especialidades de las Ciencias Sociales. Existen cuantiosos

estudios sobre el comportamiento demográfico; y se cuenta con buenas investigaciones sobre la evolución del aparato productivo, la deuda externa y los precios. No obstante, hay pocos trabajos sobre la evolución de la fiscalidad de América Latina entre 1950–1980. A su vez, hay que subrayar que no habían investigaciones multidisciplinares que hubieran tratado de relacionar estos comportamientos económicos con las dinámicas sociopolíticas, y menos aún, que hubieran tratado de explicar cómo se llegó a estas situaciones y cuáles fueron sus consecuencias en el largo plazo (véase la bibliografía adjunta).

En teoría, el elevado crecimiento demográfico no tendría por qué haber propiciado de forma automática un aumento del déficit público en el largo plazo; y las deudas externas no tendrían por qué haber afectado de forma tan letal el desarrollo económico de la región. En una primera generación —siguiendo en el plano de la teoría—, el Estado se habría enfrentado a mayores gastos e inversiones como resultado del aumento poblacional, pero en las subsiguientes se habría compensado si el total de la población se hubiera convertido en ciudadanos contribuyentes (pagadores de impuestos como trabajadores formales), los créditos externos no hubieran tenido un carácter sustitutivo del pago de impuestos en vez de complementario y se hubiera expandido de forma adecuada el aparato productivo, como consecuencia de las inversiones realizadas.

La explicación usada por bastantes historiadores de que, a mediados del siglo XX, se acudió al exterior en busca de capitales ante la falta de recursos financieros internos, debe revisarse también, puesto que se ha comprobado que cuando se concertaron algunos de los empréstitos durante las décadas de 1930 a 1950, existían ciertas reservas de ahorro interno en la región. Lo que al parecer sucedió fue que los titulares de los capitales en América Latina optaron en algunas ocasiones por exportarlos para tenerlos a buen recaudo y obtener beneficios en momentos en los que el mercado de capitales ofrecía altos dividendos en el ámbito internacional (a la vez que se esperaba a que las tasas de interés subieran en sus países). Asimismo, los trabajos clásicos de los historiadores y economistas de la década de 1980 y comienzos de 1990 señalaron que la causa del mal resultado de las políticas ISI fue la expansión exagerada del gasto público y el excesivo proteccionismo. Se señaló que la combinación de ambos

factores impidió el aumento de la competitividad y que todo ello vigorizó la corrupción (Dornbusch y Edwards 1992).

No obstante, las series estadísticas recopiladas en la presente investigación permiten establecer algunas modificaciones interpretativas, tanto a la tesis de la falta de ahorro interno, como a la del excesivo gasto público y proteccionismo como causa de los males de las políticas ISI y del descalabro de los gobiernos populistas. En líneas generales, los datos confirman que durante los períodos de auge económico —resultado de la coyuntura externa y de las políticas expansivas— se crearon fuertes endeudamientos y se produjeron inflaciones elevadas; y que las etapas de crecimiento fueron seguidas de períodos de austeridad en los que se destruyó la acumulación realizada en las etapas anteriores. Los mismos datos permiten hallar una cierta correlación entre el tipo de gobierno (militar-civil), el funcionamiento de los partidos políticos (conservadores-progresistas), la dinámica de gasto público (más expansivo o contracíclico), la evolución de los empréstitos y el comportamiento del PBI. Hay que subrayar que las *inversiones no residenciales* se destinan, por lo general, a mejorar la estructura productiva, mientras que las *inversiones residenciales* están dirigidas a mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos. Por otro lado, las *inversiones en maquinaria* se enfocan a mejorar la productividad de las empresas.

En aquellos países con un funcionamiento de un sistema de partidos políticos deficiente o una escasa alternancia política (Argentina, Brasil y México), los períodos de crecimiento fueron aprovechados de forma distinta para financiar las políticas económicas expansivas de corte populista. Los gobiernos militares de la Argentina, coincidieron con períodos de crecimiento económico, con una disminución en las *inversiones residenciales* destinadas a mantener el orden y alimentar las clientelas, con un aumento de la deuda externa. En Brasil, los gobiernos miliares convivieron con etapas de contracción, disminución de las *inversiones residenciales* y un aumento de la deuda externa. México se distinguió por un aumento continuo y constante de las *inversiones residenciales*, una disminución de las *no residenciales* y un crecimiento de la deuda externa. El caso de México fue excepcional, debido a que, con los gobiernos del PRI, las oscilaciones entre las *inversiones residenciales*, *no residenciales* y *en maquinaria*, se realizaron en

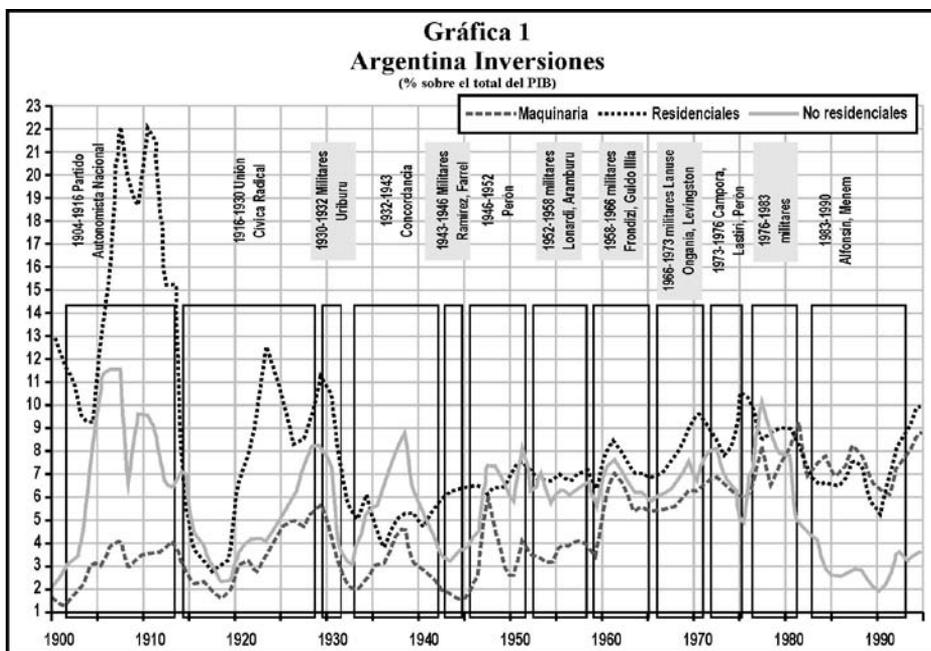
el contexto de un sistema monopartidista, pero estableciéndose diferentes ritmos sexenales que transmitían los intereses de los distintos grupos de poder e influencia. Los presidentes de la República Mexicana fueron oscilando la orientación del gasto público en función de las necesidades sociales y la capacidad del control del sistema político. Al analizar los datos, se detecta una diferenciación entre el período 1928–1964 y el 1964–1994, comprobándose que, durante la primera etapa, los sucesivos gobiernos apostaron por priorizar las inversiones en infraestructuras y que durante la segunda se fueron incrementando las *inversiones residenciales* para reducir la inquietud social, que se iba acumulando como resultado de un desajuste entre crecimiento económico y demográfico, materializado en un aumento del paro y una extensión preocupante de la informalidad. El año de 1988 demuestra ser un momento de cambio clave, ya que a partir de dicha fecha la proporción de las *inversiones residenciales* tuvo un fuerte ascenso. Se hizo evidente que había que frenar el descontento causado, primero por la crisis de la deuda de 1982 y, posteriormente, por la dudosa transparencia de las elecciones de 1988, en la que salió elegido Carlos Salinas de Gortari (véanse los gráficos adjuntos).

De la dinámica de los tres países analizados se hallan algunas coincidencias en el comportamiento de algunas de sus variables económicas y sociopolíticas. Resulta notable que en Argentina y Brasil, los períodos militares se correspondieron con una disminución de las *inversiones residenciales*. Este hecho parece indicar que los ciudadanos no obedecían prioritariamente a sus gobiernos como resultado de la recepción de beneficios y servicios públicos, sino como consecuencia de la imposición por la fuerza de la autoridad. Los gobiernos no necesitaban legitimar el poder por el apoyo de la sociedad a través de elecciones, al haber accedido a la presidencia por las armas. Se puede explicar así, cómo se pudo mantener el orden social interno al mismo tiempo que se contrajo el gasto público. En México, los gobiernos del PRI de corte más conservador (Miguel Alemán, 1946–1952 y Gustavo Díaz Ordaz, 1964–1970), apostaron por un aumento de las *inversiones no residenciales*, mientras que los de tendencia más populista (Lázaro Cárdenas, 1934–1940; Adolfo López Mateos, 1958–1964 y Luis Echeverría, 1970–1976), se inclinaron por las *inversiones residenciales* (véanse los gráficos adjuntos).

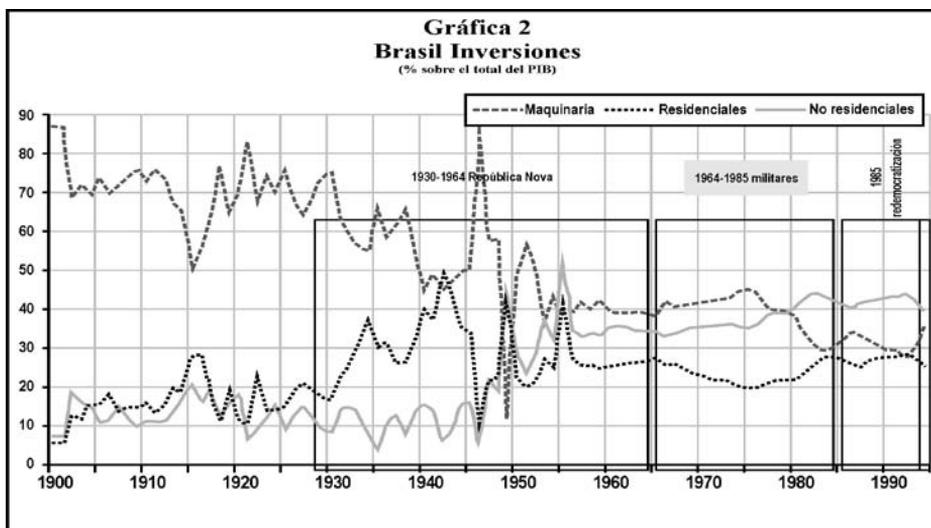
En aquellos países con un sistema de partidos más maduro o con presencia de una alternancia política más o menos regular (Chile hasta 1973; Colombia y Venezuela, a excepción del período 1948–1958, en el que estuvieron al frente los militares), se halla una cierta relación entre aumento de las *inversiones no residenciales* y la presencia de partidos de corte conservador. Los partidos liberales y de corte socialdemócrata (AD en Venezuela) tendieron a aumentar levemente las *inversiones residenciales*. La deuda externa fue creciendo de forma continua independientemente del gobierno que ocupara la presidencia.

De todos los casos analizados, parece desprenderse que en ninguna de las etapas (tanto militares como civiles, conservadores o progresistas), de los países con o sin tradición de un sistema de partidos o presencia de alternancia política, se trabajó seriamente para aumentar los ingresos tributarios. En consecuencia, el ajuste en las cuentas públicas se hizo reduciendo los gastos o aumentando la deuda externa.

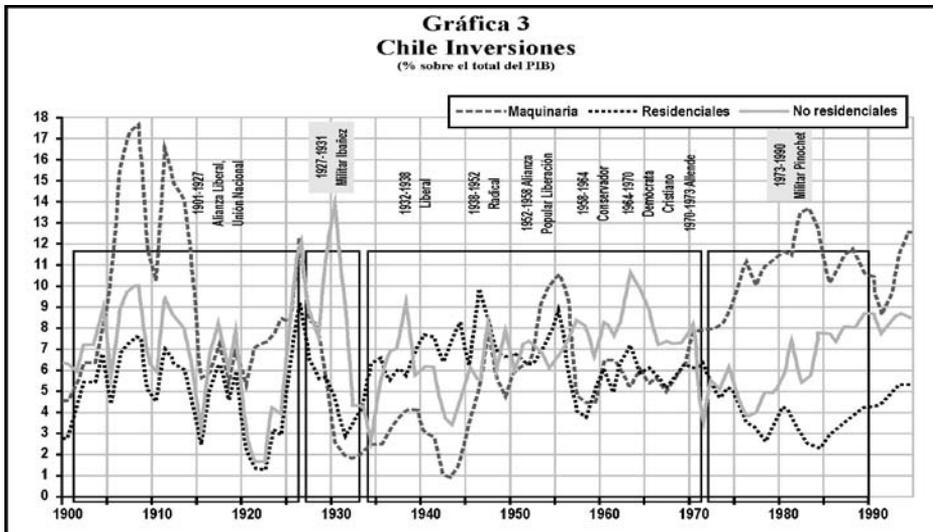
En suma, se comprueba con los datos manejados que debe revisarse la tesis que defiende que el derrumbe de los gobiernos populistas y el fracaso de las políticas ISI, se basaron casi exclusivamente en el excesivo gasto público y en el uso indiscriminado de aranceles excesivamente proteccionistas. Parece evidente que para explicar el funcionamiento y evolución de este tipo de gobiernos en América Latina, hay que incorporar la comprensión de la variable fiscal.



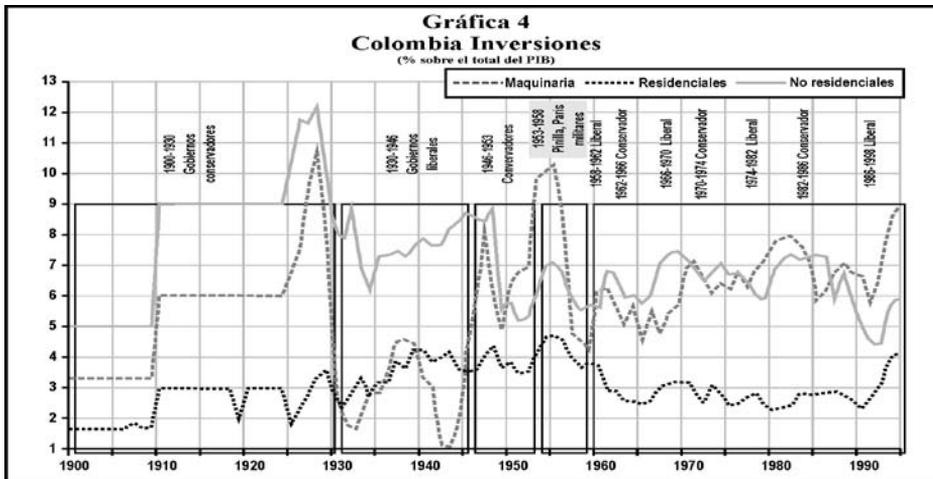
Fuentes: Elaboración propia con datos de Cepal, FMI, BID, BM, OXLAD, Hofman (1998), Mitchel (2003) y Wilkie (2002).



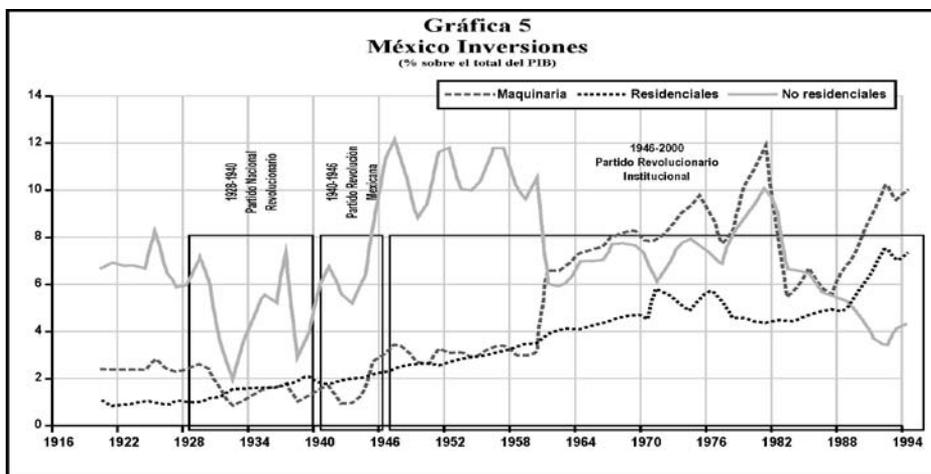
Fuentes: Elaboración propia con datos de Cepal, FMI, BID, BM, OXLAD, Hofman (1998), Mitchel (2003) y Wilkie (2002).



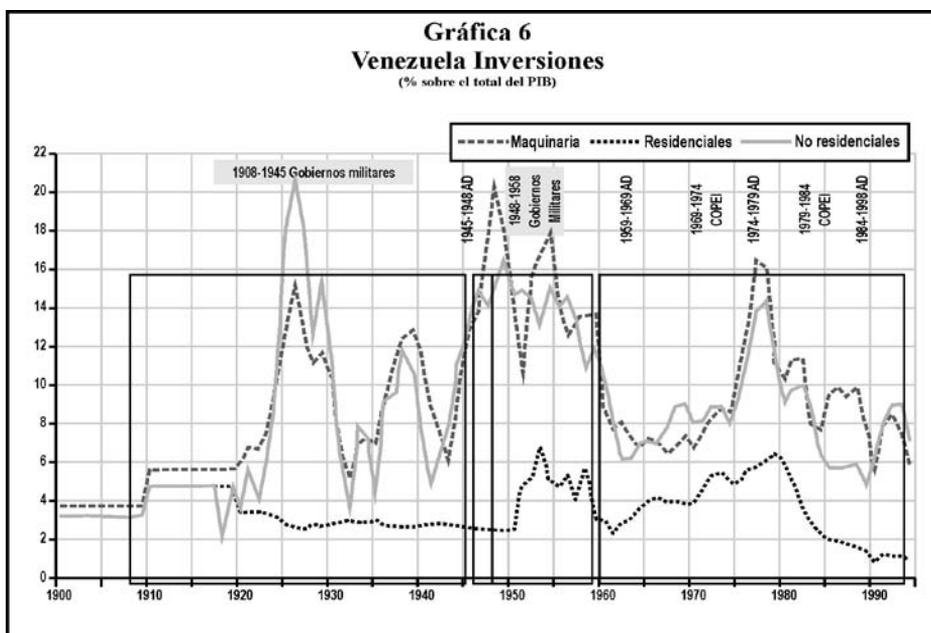
Fuentes: Elaboración propia con datos de Cepal, FMI, BID, BM, OXLAD, Hofman (1998), Mitchel (2003) y Wilkie (2002).



Fuentes: Elaboración propia con datos de Cepal, FMI, BID, BM, OXLAD, Hofman (1998), Mitchel (2003) y Wilkie (2002).



Fuentes: Elaboración propia con datos de Cepal, FMI, BID, BM, OXLAD, Hofman (1998), Mitchel (2003) y Wilkie (2002).



Fuentes: Elaboración propia con datos de Cepal, FMI, BID, BM, OXLAD, Hofman (1998), Mitchel (2003) y Wilkie (2002).

3.2 Las reformas fiscales aplazadas

El siguiente paso que se dio en la investigación fue tratar de entender por qué no se procedió a realizar las reformas fiscales que habían sido detectadas como imprescindibles para eliminar los cuellos de botella entre ingresos tributarios reducidos y gastos públicos elevados. Después de haber revisado parte de las discusiones que se mantuvieron en las Cámaras de Diputados de los distintos países de AL-6 (esta fase de la investigación se encuentra todavía en proceso de elaboración), se pudo comprobar que los diversos intentos de reforma fiscal no alcanzaron el éxito, no por desconocimiento técnico de cómo se tenía que emprender, sino por la falta de voluntad política en los actores sociales y políticos involucrados.

Los gobiernos brasileños, y en especial, el de Vargas (1930–1945), trataron de aumentar sistemáticamente su proporción de la recaudación tributaria (en 1930: 8.04%; 1940: 9.42%; 1950: 8.34%; 1960: 7.66%; 1970: 7.66%; véanse los cuadros adjuntos), pero la realidad mostró que no solo no fue posible, sino que se detecta que la proporción de ingresos tributarios fue descendiendo hasta 1970, obligando al gobierno a tener que recurrir a otras formas de gravámenes para incrementar las entradas. En unos casos se trató de solucionar el problema aprovechando la ganancia por la operación de sistemas de cambio múltiple, que permitían comprar divisas de los exportadores al tipo más bajo oficial y venderlas al tipo más alto del mercado libre. Los gobiernos de México no aumentaron la base tributaria, aún después de haberlo intentado en algunas ocasiones. La Cámara de Diputados se opuso entre 1920 y 1988 a cualquier modificación radical de la estructura fiscal. En consecuencia, la proporción de los ingresos tributarios siguió siendo exigua (1930: 6.81%; 1940: 6.67%; 1950: 7.69%; 1960: 8.68%; 1970: 8.12%). A ello se añadió que no se dio el cambio adecuado en la estructura de los ingresos tributarios, comprobándose que los impuestos sobre la renta disminuyeron a partir de 1980 (en 1969 representaban el 3.4% del total de los ingresos tributarios; en 1980 el 5.1%; en 1990 el 4.9%; y en 2000 el 4.5%), mientras que los indirectos aumentaron de forma clara (en 1969 el IVA representaba el 1.5% de los ingresos tributarios; en 1980 era el 1%; en 1990 el 3.5%; y en 2000 el 3.3%) (Aboites y Jáuregui 2005). Venezuela y Chile lograron algunas mejoras en la

proporción de sus ingresos tributarios entre 1930 y 1980. Colombia y Argentina se mantuvieron sin cambios apreciables en este mismo período (véase el cuadro 2).

Cuadro 2
Ingreso tributario total, gasto total y déficit de los gobiernos
(Promedios decenales como porcentaje del total del PBI)

		1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Argentina	Ingresos	7.6	5.6	6.6	8.8	8.4	8.8	8.8	10.8	11.7	13.6
	Gastos	8.7	7.2	8.4	11.0	13.1	13.2	11.1	14.3	13.5	14.9
	Déficit	-1.1	-1.6	-1.9	-2.2	-4.8	-4.4	-2.4	-3.5	-1.8	-1.3
Brasil	Ingresos	12.8	9.8	8.0	9.4	8.3	7.7	7.7	10.0	24.3	24.4
	Gastos	13.0	14.0	9.6	11.2	9.3	9.9	10.6	17.8	27.8	29.5
	Déficit	-0.2	-4.1	-1.5	-1.8	-1.0	-2.2	-2.9	-7.8	-3.5	-5.1
Chile	Ingresos				0.8	10.4	13.5	17.3	29.9	26.5	22.9
	Gastos				0.9	11.1	15.7	20.9	30.0	28.3	21.6
	Déficit				-0.1	-0.7	-2.2	-3.6	-0.1	-1.8	1.2
Colombia	Ingresos				5.6	6.3	7.9	8.7	11.2	12.1	12.7
	Gastos				6.2	7.8	8.1	9.5	11.6	14.1	15.4
	Déficit				-0.6	-1.5	-0.2	-0.9	-0.4	-2.0	-2.7
México	Ingresos	5.4		6.8	6.7	7.7	8.7	8.1	12.1	16.7	14.9
	Gastos	4.6		6.1	6.8	8.2	10.5	11.6	14.4	25.2	15.5
	Déficit	0.8		0.7	-0.1	-0.5	-1.8	-3.5	-2.4	-8.5	-0.5
Venezuela	Ingresos		4.6	10.1	11.7	13.6	20.6	19.9	27.5	24.9	19.1
	Gastos		5.7	9.9	11.7	13.0	20.4	19.3	22.5	24.2	19.5
	Déficit		-1.2	0.2	0.0	0.6	0.2	0.6	5.0	0.7	-0.4

Fuentes: Elaboración propia con datos de Cepal, FMI, BID, BM, OXLAD, Hofman (1998), Mitchel (2003) y Wilkie (2002).

Los mecanismos empleados para aumentar los ingresos del Estado produjeron inevitablemente un alza de la inflación (Bulmer-Thomas 1988: 294–295). En unos casos se recurrió a la devaluación de la divisa, a fin de mejorar la competitividad de los productos de exportación y con ello aumentar la recaudación. A veces se usó la

sobrevaluación para intentar mantener la estabilidad de los precios. Todo ello hizo que se crearan situaciones dispares que obligaron a imponer tributaciones adicionales especiales en momentos recesivos o a un financiamiento inflacionario (Déniz 2005; Solimano 2000).

Todos los casos estudiados dejan patente que los gobiernos no pudieron acometer las reformas fiscales integrales que necesitaban los países, debido a que su legitimidad se basaba precisamente en seguir manteniendo a los ciudadanos en su situación privilegiada de exención del pago de buena parte de sus obligaciones tributarias. La movilización de los recursos fiscales internos solo era viable cuando no era posible acudir al financiamiento externo y cuando el ahorro interno no podía salir del país debido a que el mercado de capitales no lo aconsejaba. Evidentemente, al ser casi imposible que se dieran ambas variables al mismo tiempo, se creó un círculo vicioso difícil de romper. Los gobiernos no tuvieron la fuerza política para acometer las reformas fiscales integrales necesarias para aumentar los impuestos directos, por lo que se vieron obligados a depender inexorablemente de los recursos externos y de los impuestos indirectos. De este modo, la deuda externa acabó alimentando a las redes clientelares de los gobiernos de AL-6 y la ampliación de los impuestos indirectos supuso una vigorización de las desigualdades, al fomentar un régimen fiscal regresivo en vez de progresivo.

Hay que subrayar, además, que las débiles experiencias que se dieron en aumentar la presión fiscal, acabaron generando a menudo efectos contrarios a los buscados. Al no estar acompañadas las reformas de mejoras en la administración, los intentos de modificación de los sistemas impositivos impulsaron a veces una salida de capitales. Ante la amenaza de tener que pagar más impuestos y no recibir a cambio unos servicios públicos adecuados, los contribuyentes potenciales optaron por convertirse en evasores fiscales y exportar sus capitales. La clase media —bastante exigua— no quiso soportar la carga fiscal que hubiera sido necesaria para construir un Estado de derecho; las clases más bajas sencillamente no estaban en disposición de pagar impuestos; y los empresarios eludieron al máximo sus obligaciones fiscales, aludiendo con frecuencia a que ya estaban realizando importantes esfuerzos, que la carga fiscal supondría una reducción de la competitividad en sus negocios y que no existía la necesaria

transparencia en la gestión de lo público. A ello se añadió en los países con una estructura federal, que los presidentes trataron de reducir en lo posible los ingresos de los Estados o provincias para que sus titulares (gobernadores) tuvieran que depender de los recursos federales y, por tanto, establecer lazos de dependencia política con la capital de la federación. Argentina, Brasil y México son casos claros de este comportamiento. Muy probablemente, el hecho de que no contaran con un sistema de partidos maduro o con alternancia política, hizo que el poder del presidente se elevara hasta límites insospechados.

Lo que es necesario subrayar ahora es que la clase política permitió esta evasión fiscal, pues ello confirmaba a diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, entre otras autoridades, en su situación de intermediación política en sociedades con fuertes diferencias y desigualdades. Recuérdese que el poder de los políticos se basó en la donación de recursos a la población, a cambio de legitimar el sistema con sus votos o su silencio. Las reformas fiscales se aplazaron así *sine die* por voluntad de los legisladores y de la ciudadanía. Unos no querían cumplir con sus deberes tributarios al no haberse perfeccionado el funcionamiento del Estado (administración pública ineficaz); y a otros no les interesaba políticamente que se estableciera una relación transparente entre ciudadanía y Estado a fin de seguir ocupando la función de intermediación entre este y aquella.

3.3 La relación entre votos y gasto público

Con los datos existentes parece comprobarse que existió en el período de estudio (1930–1980) una especial relación en AL-6 entre el número de votos emitidos por la ciudadanía, las políticas de gasto público utilizadas y el sistema de partidos existente. La base de datos construida para la presente investigación, parece indicar que el mayor gasto realizado por el partido en el gobierno en *inversiones residenciales* solía generar un aumento de la cosecha de votos. No obstante, se aprecia que la presencia de un sistema de partidos más consolidado hacía que esta relación no se diera de forma tan mecánica y clara. La alternancia política partidista era más complicada en el primer caso, ya que cuando un líder llegaba al poder, tendía a

perpetuarse utilizando el gasto público en su favor. La presencia de un sistema bipartidista hacía que esta situación pudiera acabar en un arreglo entre *pares* para alcanzar un sistema de turnos por medio del cual se repartiera el poder. Los sistema multipartidistas parece que dificultaron estos arreglos, ocasionando una mayor volatilidad (apoyos masivos por parte del electorado a un partido y retirada de la confianza en la siguiente elección, aparición y desaparición de partidos entre una y otra votación).

Los datos parecen confirmar que en Argentina las *inversiones residenciales* fueron siempre las más altas en términos comparativos con el resto de los países de AL-6 a lo largo de período estudiado, tanto en los períodos de gobiernos civiles como militares, salvo la excepción del período de la Concordancia (1932–1943), que ascendieron notablemente las *inversiones no residenciales*. Probablemente, este comportamiento se debió a que la Unión Cívica Radical (UCR), tenía que alimentar a sus clientelas de forma permanente y a que los militares tenían a su vez que *comprar* la obediencia en amplias capas sociales para mantener el orden. Ello indica que la utilización del miedo no fue suficiente para dominar todos los rincones de la sociedad argentina.

En México, con un sistema de partido hegemónico, el descenso del apoyo electoral al PRI a partir de 1970 se puede explicar, entre otras cuestiones, por el corte de la tendencia en el aumento de las *inversiones residenciales*, en un momento de fuerte crecimiento demográfico (y por tanto de una ampliación de las demandas sociales). El partido oficial en el poder, al no tener competidores políticos con posibilidad de ocupar la presidencia o de obtener mayoría en el Congreso, se pudo permitir reducir el gasto social, ya que sabía que tenía las elecciones ganadas de antemano. Las inversiones destinadas a mejorar la situación social, volvieron a crecer a partir de 1980, cuando se comprobó que los partidos de oposición comenzaron a tener posibilidad de llegar a gobernar. Debido a que las políticas de reducción del déficit no permitían ampliar las *inversiones residenciales y no residenciales* al mismo tiempo, el PRI tuvo que reducir las segundas a fin de elevar las primeras y con ello volver a garantizar el éxito en los comicios. Con ello se garantizaba ganar de nuevo la Presidencia, pero se renunciaba a adentrarse por el camino de la modernización de la

estructura productiva. El futuro de México quedaba hipotecado a cambio de la paz social y la seguridad del partido oficial.

El bipartidismo de Colombia y Venezuela (conformado por los partidos conservador y liberal), se correspondió con un comportamiento bastante parecido en la evolución del desarrollo de las *inversiones residenciales*, *no residenciales* y *maquinaria*. De forma clara se comprueba que la existencia de un sistema bipartidista y una alternancia política regular hizo que las *inversiones residenciales* no fueran utilizadas masivamente para ganar las elecciones. Ello parecería demostrar que las clientelas políticas se alimentaron en Colombia y Venezuela de las relaciones partidistas, antes que de la distribución de beneficios (gasto social) entre la ciudadanía.

Los casos de Chile y Brasil, caracterizados por un sistema político de representación multipartidista, muestran que tanto durante los períodos militares como los civiles, las *inversiones residenciales*, *no residenciales* y en *maquinaria* fueron oscilando de acuerdo a las necesidades coyunturales. En cada momento, los gobiernos respectivos pusieron el acento en uno u otro tipo de inversión para lograr finalidades distintas (apoyo a los empresarios, alimentación de las clientelas, construcción de infraestructuras). En consecuencia, se apostó por un modelo de desarrollo económico y político distinto al de Argentina, al de partido hegemónico de México o al bipartidista de Colombia y Venezuela. El sistema político de Chile se caracterizó por un alto grado de competitividad y una marcada polarización, debido a que la sociedad estaba dividida en múltiples opciones políticas (Partido Conservador, Liberal, Socialista, Comunista, Radical, Demócrata Cristiano y Falange Nacional), mientras que los partidos políticos mayoritarios se comportaron, cuando ocupaban el poder, como si se tratara de un sistema bipartidista. Se comprueba que los gobiernos civiles utilizaron con mayor amplitud los fondos de las *inversiones residenciales* para ganar las elecciones, que lógicamente los militares, no observándose una lógica clara en el uso de los fondos no estructurales y en *maquinaria*. Por su parte en Brasil, con un sistema político multipartidista (Partido Laborista, Social Democrático, Unión Democrática Nacional, Comunista), con presencia de un federalismo fuerte, se comprueba que las administraciones civiles utilizaron en mayor medida las *inversiones residenciales* que los gobiernos militares; que estas fueron en ascenso hasta el derrocamiento de

Getulio Vargas en 1945 y la aparición de nuevos partidos políticos en 1946; y que las *inversiones no residenciales* ascendieron suavemente a lo largo de todo el siglo XX con independencia del tipo de gobierno (véanse los gráficos adjuntos).

En suma, se comprueba que se puede encontrar una cierta lógica en la utilización de las inversiones residenciales por los distintos gobiernos en AL-6. Al parecer, los datos manejados indican que el sistema de partidos existente en cada país ayuda a explicar las oscilaciones en la utilización de las *inversiones residenciales*, *no residenciales* y en *maquinaria*. Todo parece indicar que a menor número de partidos en el juego político, las *inversiones residenciales* fueron manejadas de forma más intensa para alimentar a las redes clientelares existentes, ayudando a consolidar con ello las estructuras de Antiguo Régimen como se verá a continuación.

4. Estados débiles, gobiernos fuertes y *pacto de dominación*

Una vez analizadas las relaciones entre las dinámicas de los votos, las inversiones, el sistema de partidos, el tipo de gobierno y los ingresos fiscales, estamos en mejores condiciones para entender que: a) el *carisma* de la mayoría de los líderes populistas latinoamericanos de mediados del siglo XX no fue algo mágico o derivado de sus personales capacidades de atracción —como bastantes historiadores han afirmado—, sino que se basó en una específica relación entre las políticas de gasto público y la evolución de las dinámicas económico-fiscales en el contexto de un sistema de partidos específico; y b) que la aceleración de la dinámica económica y el aumento del gasto público en momento de crecimiento económico no impulsaron el desarrollo económico esperado ni la modernización de la estructura social y política, sino por el contrario un afianzamiento de la existente. Todo ello ayuda a explicar por qué las políticas ISI acabaron fomentando —con el consentimiento de todas las partes— el fortalecimiento de los Estados *prebenditarios*, en vez del perfeccionamiento de verdaderos Estado de derecho.

Lo que parecen poner de relieve los datos de esta investigación es que a los grupos de poder internos de los distintos países de

AL-6 estudiados, les interesaba que los ingresos del Estado fueran bajos para que los gobiernos no tuvieran una buena autonomía de movimiento. Les convenía que existieran Estados débiles con una baja institucionalización para poder influir en la toma de decisiones. El caso de Chile es una excepción en los casos analizados, por presentar precisamente una mayor institucionalización, una mejor aplicación de la justicia, una extensión de las certidumbres jurídicas y una mayor presencia del peso histórico de las tradiciones liberales del siglo XIX. No por casualidad, la historia de Chile es distinta al resto de los países de AL-6. La crisis política chilena que se abrió en 1973, se acabó cerrando correctamente en 1990. No hay que olvidar que bajo la dictadura se estableció una nueva Constitución (1980), en la que se respetaba el principio democrático de la elección de los gobernantes por el voto popular y que el propio Augusto Pinochet se sometió a un referéndum en 1988, permitiendo primero la llegada de observadores internacionales para garantizar la transparencia de los resultados y aceptando después perderlo, dando paso a un proceso de normalización democrática (San Francisco y Soto 2005; Meller 2005; Isern y Salvia 2005; French-Davis y Stallings 2001; Navia 2004; Jaksic 2001; Santa-Cruz 2005).

A excepción de Chile, los gobiernos autoritarios se inscribieron en Estados débiles. La deuda externa, la apertura comercial y la desregulación económica no fueron sino velos que han impedido comprender que el verdadero cuello de botella del desarrollo económico estuvo en las relaciones de poder existentes.

La historia de las relaciones entre los grupos empresariales y el Estado en buena parte de la Europa de la segunda mitad del siglo XX fue diferente a la de AL-6. En dicho continente, en líneas generales, los grupos empresariales crearon un pacto no explícito con el Estado y la ciudadanía (que funcionó con mayor o menor éxito según las regiones y momentos históricos) en virtud del cual los primeros realizaban las inversiones *en maquinaria* para aumentar la productividad de los factores y ampliar la oferta de puestos de trabajo (aunque uno y otro se enfrentaban); el segundo se hacía cargo de apoyar en la medida de sus posibilidades financieras el desarrollo económico (*inversiones no residenciales*), garantizar las certidumbres jurídicas y tratar de equilibrar el diferencial de rentas a través de sistemas impositivos

progresivos; y los terceros se comprometían a sufragar la arquitectura del Estado con sus impuestos, a cambio de recibir servicios públicos gestionados por una administración transparente. De este modo, los grupos empresariales lograron establecer un escenario institucional apropiado, capaz de impulsar y garantizar el desarrollo económico.

Sin embargo, la historia de América Latina durante el siglo XX parece haber sido diferente, ya que se constata que los empresarios y los ciudadanos trataron de que los gobiernos se convirtieran en sus rehenes para utilizarlos en su provecho. De este modo, el pago de los impuestos fue sustituido por inversión en deuda pública externa y en, menor medida, interna. El resultado fue inmediato: los gobiernos debieron favores y se alimentaron de las relaciones clientelares. El favor y la influencia discrecionales se convirtieron en los centros neurálgicos de unas relaciones de poder de Antiguo Régimen. Las administraciones públicas no se construyeron sobre la base de la demostración del mérito y capacidad del funcionario para la ocupación del cargo, sino sobre el testimonio de su fidelidad. Fue así como se fueron tejiendo tupidas y complicadas redes de poder en las que las relaciones personales y familiares ocuparon un espacio central; y se construyeron *países con leyes* en vez de *países de leyes*. Los sindicatos (débiles, amarillistas) y los partidos políticos (con poca autonomía con respecto al Ejecutivo) no opusieron excesivos reparos a este modo de actuar de los gobiernos, siempre y cuando obtuvieran beneficios a cambio.

Solo desde esta perspectiva se entienden mejor las acciones de personajes como Juan Domingo Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas o Luis Echeverría en México; Juscelino de Oliveira Kubitschek o Getulio Vargas en Brasil; Mariano Ospina Pérez en Colombia; Carlos Ibáñez del Campo parcialmente en Chile; o Rómulo Betancourt o Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. El gobierno de Salvador Allende no puede ser considerado en pureza de populista, ya que si bien es verdad que en sus comienzos amplió el gasto público generando un déficit fiscal y se amplió la oferta monetaria impulsando un proceso inflacionario (hechos característicos de los populismos), hay que recordar que su finalidad fue impulsar un cambio hacia el socialismo, en vez de promocionar un culto a su persona, como fue el caso del resto de los ejemplos analizados (Benavente y Cirino 2005; French-Davis 2003).

Los gobiernos de corte populista fueron aceptados por los empresarios y el conjunto de la sociedad de forma generalizada, debido a que garantizaban los servicios mínimos de la población y la subsistencia del tejido empresarial, a cambio de convertir a los *ciudadanos* y a los empresarios en *súbditos* y *clientes*, respectivamente. Las elecciones pasaron a ser mecanismos plebiscitarios. En unos casos, las dictaduras fueron la salida a los populismos (Argentina, Brasil y Chile), mientras que en otros, se vistieron de un cierto manto *democrático* (México, Venezuela y Colombia).

No cabe duda de que durante los gobiernos populistas de mediados del siglo XX, se retrocedió con respecto a algunos avances liberales del siglo XIX, en los que las relaciones de poder institucionalizadas avanzaron sobre las personalistas. Los enfrentamientos que se dieron a lo largo del siglo XIX entre los partidos políticos existentes y las discusiones sobre cómo ordenar el territorio políticamente (centralismo-regionalismo), integrar al indio (indigenismo), establecer una justicia, organizar una administración y una hacienda pública y establecer relaciones entre el Estado y la Iglesia (Gargarella 2005; Krauze 2005; Murillo 2005; Novaro y Palermo 2004). Ello nos permite afirmar que no es posible seguir narrando una historia homogénea de los siglos XIX y XX.

Para entender mejor esta relación entre políticas públicas y gestión del gasto, hay que recordar que los sistemas políticos de América Latina entre 1930 y 1980, funcionaron sobre la base de la denominada *ficción democrática* o *pacto de dominación*. Es evidente, que hay que comenzar recordando que los conceptos de *Estados fuertes* y *Estados sobredimensionados* no son equiparables, y menos aún intercambiables. Lo que es importante ahora subrayar es que los gobiernos populistas latinoamericanos relevaron a mediados de siglo XX a sus poblaciones de las obligaciones tributarias, estableciendo en consecuencia una política de gasto público dirigida no a mejorar las condiciones económicas (*inversiones no residenciales*), sino a *comprar* la aceptación de la ciudadanía por medio de la distribución de las *inversiones residenciales*. El gobierno gastaba en servicios sociales (sanidad, educación, vivienda, alimentación), sin exigir a la población que cumpliera plenamente con sus obligaciones fiscales a cambio.

De esta forma, se puede entender mejor que la ciudadanía aceptara autoritarismos desmedidos. La *obediencia debida* no era únicamente lealtad ciega, como se acostumbra a repetir, sino demostración de reciprocidades. No existía una democracia plena, pero tampoco los ciudadanos se vieron compelidos a cumplir de lleno con sus obligaciones. Si las políticas sociales fueron respuestas a protestas y movilizaciones sociales, se puede interpretar que los regímenes populistas no estaban constituidos por un Estado fuerte, compuesto por una maquinaria casi perfecta en manos de operadores altamente cualificados, sino que se trataba de regímenes corporativos (en los términos de O'Donnell, Linz, Schmitter y Stepan), conformados por un Ejecutivo fuerte, un Legislativo débil, dominado por el partido oficial (garantizado por el fraude electoral) y un Judicial casi inexistente, que permitía dirigir la sociedad mediante mecanismos eficaces de *cooptación* (los beneficios son entregados desde arriba como regalos en vez de como servicios públicos).

Esta explicación permite entender mejor que los Estados no fueron débiles por no gozar del suficiente apoyo de la sociedad en forma de contribuciones y participación, sino que la participación fue escasa y reducida precisamente para evitar que los Estados fueran fuertes. El nudo de las relaciones entre sociedad y Estado se basaba en la debilidad del segundo para que la primera pudiera actuar con mayor autonomía. El resultado en el largo plazo fue que la escasa institucionalización dificultó el desarrollo económico autosostenido y permanente en el tiempo. Las crisis sucedieron a los períodos de auge de forma continua.

En suma, cabe plantear que si no se dio un desarrollo económico integrado y autosostenido en América Latina entre 1930 y 1980, no se debió exclusivamente a los desajustes creados por las políticas ISI y a los desequilibrios causados por los gobiernos populistas —como han repetido múltiples investigadores— sino además a la inexistencia de sistemas impositivos basados en la obtención de recursos con la gravación de las rentas personales, al funcionamiento precario de las administraciones públicas, al reducido crecimiento de la productividad laboral; y, sobre todo, al fortalecimiento de las estructuras de poder propias de las sociedades de Antiguo Régimen.

Las experiencias de apertura comercial, desregulación económica y sistemas electorales transparentes realizados en la década de 1990 pondrían de relieve que estas variables eran condiciones necesarias, pero no suficientes, para impulsar desarrollos económicos y políticos integrados. Ello permite afirmar que la historia no se *torció* en América Latina en la *década perdida* de 1980 (en términos de la Cepal) por una expansión excesiva del gasto, o en la *década semiperdida* (en términos del FMI) de 1990 por un crecimiento desequilibrado de la economía, dejando a su paso millones de pobres, sino a mediados del siglo XX, cuando se optó por la aceptación de las políticas de aumento del gasto público con el aplazamiento *sine die* de las reformas fiscales necesarias, la creación de administraciones públicas eficientes, las reformas laborales capaces de impulsar mejoras en la productividad y la transformación de las estructuras de poder. El Estado fue secuestrado por distintos gobiernos a mediados del siglo XX con el consentimiento de la sociedad, con la promesa de garantizar el bien público y patrocinar la eficacia económica.

Queda claro que la dependencia económica externa y el gasto público excesivo no pueden interpretarse como las causas fundamentales ni únicas de los desequilibrios económicos y del débil perfeccionamiento de los Estados de derecho en América Latina entre 1930 y 1980. La dependencia del sector externo, los aparatos productivos poco integrados y la presencia de extensas bolsas de pobreza fueron la consecuencia —no la causa— de la escasa institucionalización del Estado.

Referencias bibliográficas

- ABOITES AGUILAR, Luis y Luis JÁUREGUI (coordinadores)
2005 *Penurias sin fin. Historia de los impuestos en México. Siglos XVIII–XX*. México D.F.: Instituto José María Luis Mora.
- ALTIMIR, Oscar
1987 «Income Distribution Statistics in Latin America and their Reliability». En *Review of Income and Wealth*, Series 33 (2), junio.

1970 «La dimensión de la pobreza en América Latina». En *Serie Cuadernos de la Cepal*, 27, Santiago de Chile.

ARRIAGA, Eduardo E.

1970 *Mortality decline and its demographic effect in Latin America*. Berkeley: University of California Press.

AZUELA DE LA CUEVA, Antonio

1989 *La ciudad, la propiedad privada y el derecho*. México D.F.: El Colegio de México.

BALMORI, Diana; Stuart F. VOSS y Miles WORTMAN

1990 *Las alianzas de familias y la formación del país en América latina*. México D.F.: FCE.

BID, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

2000 *Desarrollo más allá de la Economía. Progreso económico y social en América latina*. Washington: BID.

BARKIN, David

1978 *Desarrollo regional y reorganización campesina: la Chontalpa como reflejo del problema agropecuario mexicano*. México D.F.: Editorial Nueva Imagen.

BARRACLOUGH, Solon y Juan Carlos COLLARTE (editores)

1973 *Agrarian structure in Latin America. A Resume of the CIDA Land Tenure Studies of Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú*. Massachusetts: Heath & Company.

BARRÉ, Marie-Chantal

1983 *Ideologías indigenistas y movimientos indios*. México D.F.: Siglo XXI.

BEAVER, Steven E.

1975 *Demographic transition theory reinterpreted: An application to recent natality trends in Latin America*. Massachusetts: Lexington Books.

- BENAVENTE URBINA, Andrés y Julio Alberto CIRINO
2005 *La democracia defraudada. Populismo revolucionario en América Latina*. Buenos Aires: Grito Sagrado.
- BERRY, A.
1987 «Poverty and inequality in Latin America». En *Latin American Research Review* 22 (2), pp. 202–214.
- BLACK, Jan Knippers (editor)
1991 *Latin America. Its problems and its promise. A multidisciplinary introduction*. Segunda edición. Boulder: Westview Press.
- BONFILL, Guillermo
1981 *Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios de América Latina*. México D.F.: Nueva Imagen.
- BULMER-THOMAS, Víctor
1998 *La historia económica de América Latina desde la independencia*. México D.F.: FCE.
- CARDOSO, Eliana y Ann HELWEGE
1993 *La economía latinoamericana. Diversidad, tendencias y conflictos*. México D.F.: FCE.
- CASAÚS ARZÚ, Marta
1992 *Guatemala: Linaje y racismo*. San José: FLACSO.
- CASTELLS, Manuel
1997 *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Madrid: Alianza Editorial.
- CEPAL, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
2002 *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2001*. Santiago de Chile: Cepal.
- 1990 *Magnitud de la pobreza en América Latina en los años ochenta*. Santiago de Chile: Cepal.

- COATSWORTH, John H. y Gabriel TORTELLA CASARES
2002 «Crecimiento económico y atraso: México y España». Ponencia presentada al *Congress of the International Economic History Association*. Buenos Aires.
- COMÍN, Francisco; Mauro FERNÁNDEZ y Enrique LLOPIS (editores)
2005 *Historia económica mundial (siglos X–XX)*. Barcelona: Crítica.
- COURIEL, A.
1984 «Poverty and underemployment in Latin America». En *Revista de la Cepal*, 24, pp. 39–62.
- DEININGER, K. y L. SQUIRE
1996 «A new data set measuring income inequality». En *World Bank Economic Review*, 10, pp. 565–591.
- DÉNIZ ESPINÓS, José Antonio
2005 «Crecimiento, inseguridad económica y nueva ciudadanía con equidad en América Latina». En SANTAMARÍA, Antonio (coord.) *El suplicio de Tántalo. Las economías latinoamericanas en perspectiva histórica*. Madrid: MAPFRE y Fundación Tavera.
- DÍAZ POLANCO, Héctor
1991 *Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios*. México D.F.: Siglo XXI y UNAM.
- DÍAZ-BRIQUETS, Sergio
1983 *International migration within Latin America and the Caribbean: An overview*. Nueva York: Center for Migration Studies.
- DORNSBUSCH, Rudiger y Sebastián EDWARDS (compiladores)
1992 *Macroeconomía del populismo en la América Latina*. México D.F.: FCE.
- DUNCAM, Kenneth e Ian RUTLEDGE (editores)
1987 *La tierra y la mano de obra en América Latina*. México D.F.: FCE.

FANELLI, José María

2005 «La integración regional y sus desafíos». En CRESPO, Ismael y Antonia MARTÍNEZ (editores). *Política y gobierno en América Latina*. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 201–231.

FAVRE, Henri

1998 *El indigenismo*. México D.F.: FCE.

FILGUERA, Fernando y Cecilia ROSSEL

2005 «Desigualdad, pobreza y exclusión: impotencia, fatiga y asedio en las democracias latinoamericanas». En CRESPO, Ismael y Antonia MARTÍNEZ (editores) *Política y gobierno en América Latina*. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 351–395.

FRENCH-DAVIS, Ricardo

2003 *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile*. Santiago de Chile: J.C. Sáez Editor.

FRENCH-DAVIS, Ricardo y Barbara STALLINGS (editores)

2001 *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973*. Santiago de Chile: Cepal.

FUENTES QUINTANA, Enrique

1990 *Las reformas tributarias en España*. Barcelona: Crítica.

GARGARELLA, Roberto

2005 *Los fundamentos legales de la desigualdad. El constitucionalismo en América (1776–1860)*. Madrid: Siglo XXI.

HABER, S.H. (editor)

2000 *Political institutions and economic growth in Latin America: essays in policy, history and political economy*. Stanford: Stanford University Press.

HIGGINS, M. y J.G. WILLIAMSON

1999 «Explaining inequality the world round: cohort size, Kuznets curves, and openness». En *NBER Working Paper 7224* (julio), Cambridge.

- ISERN MUNNÉ, Pedro y Gabriel C. SALVIA (compiladores)
2005 *La experiencia chilena. Consensos para el desarrollo*. Buenos Aires: CADAL.
- JAKSIC, Iván A.
2001 *Andrés Bello: la pasión por el orden*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- JANVRY, A. DE
1981 *The agrarian question and reformism in Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University.
- KLOR DE ALVA, J. Jorge; Miguel LEÓN-PORTILLA, Manuel GUTIÉRREZ ESTÉVEZ y Gary H. GOSSEN (editores)
1995 *De palabra y obra en el nuevo mundo*. Madrid: Siglo XXI y Junta de Extremadura.
- KRAUZE, Enrique
2005 *La presencia del pasado. La huella indígena, mestiza y española en México*. Madrid: Tusquets.
- LEHMAN, David (editor)
1974 *Agrarian reform and agrarian reformist*. Londres: s/e.
- LEWIS, Oscar
1982 *Los hijos de Sánchez*. México D.F.: Grijalbo.
- LIPSET, S.M.
1963 *El hombre político. Las bases sociales de la política*. Buenos Aires: EUDEBA.
- LOMBARDI, M. y D. VEIGA (editores)
1989 *Las ciudades en conflicto. Una perspectiva latinoamericana*. Montevideo: Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay y Ediciones de la Banda Oriental.
- LOMNITZ, Larissa A. y Marisol PÉREZ LIZAURO
1987 *Una familia de la Élite mexicana. Parentesco, clase y cultura, 1820–1980*. México D.F.: Alianza.

- LONG, Norman y Bryan ROBERTS
1997 «Las estructuras agrarias de América Latina (1930–1990)». En BETHELL, L. (editor) *Historia de América Latina*. Volumen 11: Economía y sociedad desde 1930. Barcelona: Cambridge University Press y Editorial Crítica, pp. 278–334.
- MAYER, Enrique y Elio MASFERRER
1979 «La población indígena de América en 1978». En *América Indígena* 39, pp. 217–337.
- MELLER, Patricio (editor)
2005 *La paradoja aparente. Equidad y eficiencia: resolviendo el dilema*. Santiago de Chile: Taurus.
- MERRICK, Thomas W.
1997 «La población de América Latina, 1930–1990». En BETHELL, L. (editor) *Historia de América Latina*. Volumen 11: Economía y sociedad desde 1930. Barcelona: Cambridge University Press y Editorial Crítica, pp. 162–215.
- MIRÓ, Carmen A.
1984 «América Latina: transición demográfica y crisis económica, social y política». En *Memorias del Congreso Latinoamericano de Población y Desarrollo I*, pp. 65–114.
- MITCHELL, B.R.
2003 *International Historical Statistics. The Americas (1750–1993)*. Quinta edición. Nueva York: Palgrave MacMillan.
- MURILLO, María Victoria
2005 *Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América Latina*. Madrid: Siglo XXI.
- NAVIA, Patricio
2004 *Las grandes alamedas. El Chile post Pinochet*. Santiago de Chile: La Tercera y Mondadori.

NOVARO, Marcos y Vicente PALERMO (editores)

2004 *La historia reciente. Argentina en democracia*. Buenos Aires: EDHASA.

NÚÑEZ, Clara Eugenia y Gabriel TORTELLA CASARES (editores)

1993 *La maldición divina. Ignorancia y atraso económico en perspectiva*. Madrid: Alianza Editorial.

O'ROURKE, Kevin H.

2001 *Globalization and Inequality: Historical Trends*. Dublin: University of Dublin, Trinity College Dublin, National Bureau of Economic Research (NBER) y Centre for Economic Policy Research (CEPR).

OLIVEIRA, Orlandina DE y Bryan ROBERTS

1997 «El crecimiento urbano y la estructura social urbana en América Latina (1930–1980)». En BETHELL, L. (editor) *Historia de América Latina*. Volumen 11: Economía y sociedad desde 1930. Barcelona: Cambridge University Press y Editorial Crítica, pp. 216–277.

ONU, ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

1985 *Estimates and projections of urban, rural and city populations, 1950–2025: the 1982 assesment*. Nueva York: ONU.

1980 *Patterns of urban and rural population growth*. Nueva York: ONU.

PALACIOS, Marco

1983 *El café en Colombia 1850–1970, una historia económica, social y política*. Segunda edición. Bogotá: El Ancora Editores.

PALLONI, Alberto

1981 «Mortality in Latin America: emerging patterns». En *Population and Development Review* 7:4, pp. 623–649.

PÉREZ HERRERO, Pedro

2002 *La América colonial (1492–1763). Política y sociedad*. Madrid: Síntesis.

PRZWORSKI, Adam

1995 *Democracia y mercado*. Cambridge: Cambridge University Press.

RAY, D.

2000 *La economía del desarrollo*. Barcelona: A. Bosch.

REYNA, José Luis (compilador)

1995 *América Latina a fines de siglo*. México D.F.: FCE.

RODRÍGUEZ, Nemesio y Edith SOUBIÉ

1978 «La población indígena actual en América Latina». En *Nueva Antropología* III (9), pp. 49–66.

SAN FRANCISCO, Alejandro y Ángel SOTO (editores)

2005 *Las elecciones presidenciales en la historia de Chile 1920–2000*. Santiago de Chile: Instituto de Historia y Centro de Estudios Bicentenario.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás

1977 *La población de América Latina. Desde los tiempos precolombinos al año 2000*. Madrid: Alianza Editorial.

SANTA-CRUZ, Arturo

2005 «Redefiniendo la soberanía, creando una red: la observación internacional del plebiscito chileno de 1988». En *Foro Internacional* XLV (3), pp. 489–516.

SMITH, Peter

2005 *Democracy in Latin America*. Nueva York: Oxford University Press.

SOLIMANO, A. (compilador)

2000 *Desigualdad social. Valores, crecimiento y el Estado*. El Trimestre Económico. México D.F.: FCE.

SOTO, Hernando DE; Enrique GHERSI y Mario GHIBELLINI

1992 *El otro sendero. La revolución invisible en el Tercer Mundo*. Buenos Aires: Sudamericana.

THIESENHUSEN, W.C.

1995 *Broken promises. Agrarian reform and the Latin American experience*. Boulder y Oxford: Westview Press.

TOKMAN, Víctor E. y Guillermo O'DONELL (compiladores)

1999 *Pobreza y desigualdad en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.

TORTELLA CASARES, Gabriel (editor)

1990 *Education and economic development since the industrial revolution*. Valencia: Alfonso El Magnánimo.

TOURAINE, Alain

1989 *América Latina. Política y sociedad*. Madrid: Espasa Calpe.

URRUTIA, M.

1985 *Winners and losers in Colombia's economic growth of the 1970s*. Nueva York: Oxford University Press.

WILKIE, J.W.

2002 *Statistical Abstract of Latin America 38*. Los Ángeles: University of California.